

20ª REUNION — Continuación de la 4ª SESION ORDINARIA — JULIO 30 DE 1986

**Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,
Adolfo L. Stubrin y Federico T. M. Storani**

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Be Inicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupic
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNÓZ, Antonio
ALENDE, Oscar Eduardo
ALSOGARAY, María Julia
ALTAMIRANO, Amado Héctor H.
ALTERACH, Miguel Ángel
ALLEGRENE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARAMBURU, José Pedro
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSÓN, Héctor Roberto
AUSTERLITZ, Federico
AUVER, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Víctor
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERCOVICH RODRÍGUEZ, Raúl
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCOTTO, Luis Fidel
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BONINO, Alberto Cecilio
BORDA, Osvaldo
BORDÓN GONZÁLEZ, José O.
BOTTA, Felipe Esteban
BRIZ de SÁNCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José

CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso C.
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARO, Antonio Gino
CLÉRICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CURATOLO, Atilio Arnold
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DE LA SOTA, José Manuel
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
DEL RÍO, Eduardo Alfredo
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DIGÓN, Roberto Secundino
DIMASI, Julio Leonardo
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
FERRÉ, Carlos Eduardo
FIGUERAS, Ernesto Juan
FINO, Torcuato Enrique
FLORES, Anibal Eulogio
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GERARDUZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo
GIMÉNEZ, Jacinto
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GINZO, Julio José O.
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino

GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Anibal
GROSSO, Carlos Alfredo
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GUZMÁN, Horacio
GUZMÁN, María Cristina
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
JAROSLAVSKY, César
JUEZ PÉREZ, Antonio
LAMBERTO, Oscar Santiago
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LENCINA, Luis Ascensión
LESCANO, David
LESTELLE, Eugenio Alberto
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, Santiago Marcellino
LOSADA, Mario Anibal
LUGONES, Horacio Enerio
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MASINI, Héctor Raúl
MAYA, Héctor María
MEDINA Alberto Fernando
MILANO, Raúl Mario
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOREYRA Omar Demetrio
MOSSO, Alfredo Miguel
MOTHE, Félix Justiniano
MULQUI, Hugo Gustavo
NATALE, Alberto A.
NEGRÍ, Arturo Jesús
NIEVA, Próspero
ORTIZ, Pedro Carlos
PAPAGNO, Rogelio
PARENTE, Rodolfo Miguel

PATINO, Artemio Agustín
 PEDRINI, Adam
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERA OCAMPO, Tomás Carlos
 PEREYRA, Pedro Armando
 PÉREZ, René
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 POSSE, Osvaldo Hugo
 PUEBLA, Ariel
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REYNOSO, Adolfo
 REZEK, Rodolfo Antonio
 RIGATUSO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix
 RIUTORT de FLORES, Olga E.
 RODRIGO, Juan
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 RUBEO, Luis
 RUIZ, Ángel Horacio
 RUIZ, Osvaldo Cándido
 SALTO, Roberto Juan
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio

SARQUIS, Guillermo Carlos
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Carlos Oscar
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SOLARI BALLESTERO, Alejandro
 SORIA ARCH, José María
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Conrado Hugo
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBERIN, Adolfo Luis
 STUBERIN, Marcelo
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TOMA, Miguel Ángel
 TORRES, Carlos Martín
 TORRES, Manuel
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TRIACA, Alberto Jorge
 ULLOA, Roberto Augusto
 USIN, Domingo Segundo
 VACA, Eduardo Pedro
 VANOLI, Enrique Néstor
 VIDAL, Carlos Alfredo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZOCCOLA, Elcio Pablo
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

BAIZUELA, Delfor Augusto¹
 BRIZUELA, Juan Arnaldo¹
 CONTRERAS GOMEZ, Carlos A.¹
 DI CIO, Héctor

FAPPIANO, Oscar Luján¹
 GONZALEZ, Héctor Eduardo
 IGLESIAS, Herminio¹
 IRIGOYEN, Roberto Osvaldo¹
 LEMA MACHADO, Jorge¹
 MACAYA, Luis María¹
 MARTÍNEZ, Luis Alberto¹
 MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel J.¹
 MASSACCESI, Horacio¹
 MASSEI, Oscar Ermelindo¹
 PIUCILL, Hugo Diógenes¹
 PRONE, Alberto Josué
 SUÁREZ, Lionel Armando¹
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos¹
 VANOSSI, Jorge Reinaldo¹

AUSENTES, CON AVISO:

ALDERETE, Carlos Alberto
 ALSOGARAY, Alvaro Carlos
 BELLO, Carlos
 BLANCO, Jesús Abel
 CAFIERO, Antonio Francisco
 CAEDOZO, Ignacio Luis R.
 CARIGNANO, Raúl Eduardo
 CAVALLARI, Juan José
 COLOMBO, Ricardo Miguel
 DUSSOL, Ramón Adolfo
 FALCIONI de BRAVO, Ivelise I.
 GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
 LÉPORI, Pedro Antonio
 MAIZKIN, Jorge Rubén
 MELÓN, Alberto Santos
 MIRANDA, Julio Antonio
 SABADINI, José Luis
 SILVA, Roberto Pascual

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la concesión de uso otorgada a la Sociedad Rural Argentina del inmueble que actualmente ocupa entre las avenidas Sarmiento y Santa Fe y las calles Cerviño y Oro, de la Capital Federal (119-S-85). (Pág. 2458.)
2. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pedrini con motivo de una información contenida en una publicación periodística (1.347-D-86). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2469.)
3. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. (Pág. 2470.)
4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Druetta con motivo de manifestaciones formuladas durante el debate por el señor diputado Bielicki (1.358-D-86). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2482.)
5. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona definitivamente (ley 23.333). (Pág. 2483.)

6. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Bielicki con motivo de manifestaciones formuladas por el señor diputado Druetta (1.357-D-86). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2483.)
7. Moción del señor diputado Huarte de que se aplase la consideración de los dictámenes de las comisiones de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Internacional de Telecomunicaciones adoptado en Nairobi, Kenya, el 6 de noviembre de 1982 (5-S-86). Se aprueba. (Pág. 2483.)
8. Consideración del proyecto de ley en revisión, fundado en el dictamen producido por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, por el que se aprueban las cuentas generales presentadas por el Poder Ejecutivo correspondientes a los ejercicios de los años 1973, 1974 y 1975 (8-S-86). Se sanciona definitivamente (ley 23.334). (Pág. 2484.)
9. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de ley del señor diputado Cortese por el que se introducen modificaciones al Código Penal (ley 11.1/9). (3.500-D-85.) Se sanciona. (Pág. 2485.)

del Día N° 204 de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, referido a las cuentas generales presentadas por el Poder Ejecutivo correspondientes a los ejercicios de los años 1973, 1974 y 1975 y aconsejando su aprobación.

La presente observación será ampliada en su oportunidad.

Saludo a usted muy atentamente.

Alcario C. Alsogaray.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2º.

— El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

9

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

(Orden del Día N° 76)

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Cortese sobre modificaciones al Código Penal, ley 11.179; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se introducen al Código Penal (ley 11.179) las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO 163

Incorpórase como inciso 5º el siguiente:

5º Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de

su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren.

ARTÍCULO 277

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 277. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

- 1º Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo;
- 2º Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo;
- 3º Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble.

ARTÍCULO 278

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 278 — El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble.

ARTÍCULO 279

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 279. — Están exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 277 a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que debiesen especial gratitud.

La exención de pena a que se refiere el párrafo anterior no se aplicará al que haya ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 13 de mayo de 1986.

Lorenzo J. Cortese. — Juan C. Castiella. — Ricardo A. Alagia. — Oscar N. Caferrri. — José A. Furque. — Mario A. Gerarduzzi. — María F. Gómez Miranda. — Rodolfo M. Parente. — Hugo D. Piucill. — Osvaldo H. Posse. — Lionel A. Suárez.

En disidencia parcial:

Próspero Nieva. — Jorge Stolkner.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2792.)

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha analizado el proyecto presentado por el diputado Cortese sobre reformas a los artículos 163, 277, 278 y 279 del Código Penal con el agregado de un artículo 277 bis, y, por mayoría, ha decidido aprobar el proyecto con ligeras variantes de forma.

Por los fundamentos del proyecto, por los que se expresan a continuación y por los que ampliará el miembro informante del despacho de la mayoría, se ha decidido mantener la incorporación del inciso 5º al artículo 163 del Código Penal propuesto en el proyecto. La extensión de nuestro país, con zonas desprovistas de control inmediato, por cuyas rutas debe transitar el transporte automotor de mercaderías, sin otra protección que la sola presencia del transportista, el que necesariamente debe realizar escalas no sólo para reabastecer al vehículo, sino para su propia manutención y descanso, que obligan a dejar el vehículo con su carga sin vigilancia directa, está señalando la necesidad de proteger con mayor intensidad la carga transportada de los hurtos de que pudiere ser objeto tanto en el itinerario como en las escalas. Es una situación análoga a la contemplada en el inciso 1º del artículo 163 donde por la clase de objetos y por el lugar y las modalidades del trabajo del campo crearon la necesidad de una mayor protección de los productos separados del suelo o máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo. Desde que se ha desarrollado la fabricación de automotores para el transporte de mercaderías y la construcción de rutas aptas para el tránsito rápido de estos vehículos, este medio de transporte ha pasado a ser vital para el traslado de cosas muebles, mercaderías y los productos cosechados en los campos, sobre el cual se basa fundamentalmente la economía de nuestro país.

El inciso 5º del artículo 163 proyectado, contiene una fórmula amplia comprensiva de cualquier modalidad que pudiera revestir los hurtos de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaren. Con esta incorporación del inciso 5º queda automáticamente agravado el robo de esos mismos objetos en iguales circunstancias en virtud de lo previsto en el art. 167, inciso 4º del Código Penal. Si sólo se lo previera como agravante del robo, quedarían sin protección especial todas aquellas situaciones a que se ha aludido precedentemente, sin perjuicio de que en diversos casos particulares obligaría a considerarlos como hurtos simples por las dificultades normales de la prueba.

Para la efectiva protección de la carga transportada, es necesario complementarlo con una modernización del capítulo correspondiente al delito de encubrimiento, fundamentalmente en lo que se refiere a las figuras denominadas de receptación cuando positivamente se sabe el origen delictuoso de lo que se adquiere, como a la de receptación de cosas de procedencia sospechosa, cuando, por las circunstancias concretas del

caso, el adquirente debía sospechar ese origen delictuoso y con total desaprensión para el orden jurídico, asintiendo en la posibilidad de ese origen delictuoso prefiere realizar el negocio antes de cerciorarse de su verdadero origen. Dichas circunstancias se fundarán generalmente, como se señala en el Código Penal italiano, en las condiciones del oferente, por las cualidades de las cosas y por su precio. Pero, dada la multiplicidad de situaciones que pueden revestir los diversos casos particulares, es preferible contemplarlas a todas con la denominación genérica "de acuerdo con las circunstancias" como se prevé en el proyecto, máxime cuando en el proyecto se contemplan otras hipótesis como las de recibir u ocultar con fin de lucro, situaciones en las cuales no puede hablarse de un precio, o por las cosas, si se trata de dinero, por ejemplo. Es así, como lo sostiene la más autorizada doctrina y la mayoritaria jurisprudencia nacional, que este tipo penal contempla una receptación dolosa, con expresa admisión del dolo eventual, quedando descartada la posibilidad de que se lo considere un tipo culposo, porque no se trata de una situación de imprudencia o negligencia sino de una actitud temeraria del autor con relación al orden jurídico que, por las circunstancias, debió abstenerse de obrar y sin embargo lo hizo asintiendo en esa producción eventual.

El tipo penal tiende fundamentalmente a subsumir en él la conducta de aquel que ha centralizado su actividad en la receptación de cosas de origen dudoso poniendo condiciones tan favorables que estimulan la producción de hechos delictuosos, sabiendo, sin concierto previo, que tendrán un lugar seguro para negociar o reducir el producto del delito sin que se les exija la acreditación del origen de los mismos. Técnicamente no son partícipes del delito cometido para obtener las mercaderías, por la falta de promesas anteriores al mismo o porque no son quienes han determinado directamente a otro a cometerlo y de allí la necesidad de prever un tipo especial que abarque estas conductas que no se fundan en el positivo conocimiento del origen delictuoso de las cosas que adquiere, recibe o guarda. De allí también la necesidad de agravar cuando el autor hace de ello su actividad habitual.

En el proyectado artículo 277 bis se cambia la expresión "debía presumir" por "debía sospechar" que se la considera más precisa en su indicación del origen delictuoso de los efectos y en su relación con los índices mensuradores de las circunstancias particulares del caso concreto, y, a fin de evitar la introducción de artículos con la denominación bis, al artículo 277 bis del proyecto se lo incorpora por esta comisión al Código Penal como artículo 278 y se unifican los artículos 278 y 279 del proyecto con el número 279 con dos párrafos, porque ambos contemplan causales de no aplicación de la pena.

Los incisos 1º y 2º del artículo 277 del Código Penal proyectados contemplan con la mayor amplitud posible y con una moderna concepción el denominado favorecimiento personal y el real. El inciso 3º se refiere a la receptación dolosa cuando se sabe proveniente de un delito.

Oswaldo H. Posse.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Desde hace varios años el transporte automotor en el país ha venido siendo agredido por verdaderas bandas dedicadas a sustraer la valiosa carga transportada.

Esa tendencia, lejos de atemperarse, ha continuado creciendo en los últimos años en medida realmente alarmante, lo que ha motivado la preocupación de la cámara que agrupa a los transportistas y a las entidades representativas del comercio y de los sectores manufactureros. Con motivo del aumento de este tipo de delincuencia, que perjudica seriamente tanto al comercio estadual como el interjurisdiccional, la Secretaría de Comercio Interior, a través del Consejo Asesor del Comercio Interior (CACI), luego de diversas reuniones arribó a una serie de conclusiones para combatir estos robos y hurtos. Entre las mismas, recomienda medidas más severas de carácter penal especialmente para los encubridores, sin cuya presencia y dada la magnitud de la mercadería sustraída estos delitos serían de muy difícil comisión.

La crónica periodística ha dado cuenta reiteradamente de hechos de esta naturaleza, que por haber tenido lugar principalmente en las rutas, en zonas apartadas y desprovistas de control inmediato, denominó a sus autores con la expresión gráfica de "piratas del asfalto", señalando que entre agosto de 1984 y abril de 1985 se produjeron 752 hechos de ese tipo, cometidos a mano armada.

La sola mención de esta cifra da una idea exacta de la importancia y gravedad del problema respecto del cual el legislador debe buscar un medio idóneo que permita contar con tipos penales adecuados a estas modalidades de delinquir.

Los tipos que se reestructuran tienen la suficiente amplitud como para proteger también el traslado de cargas por otros medios de transporte, como el ferrocarril, que también es objeto de permanentes robos y hurtos. Así se sugiere en este proyecto.

Las modificaciones que propiciamos son las siguientes. Agregamos un inciso en el artículo 163 para considerar como hurto agravado al que verse sobre mercaderías o cosas muebles transportadas por cualquier medio, calificante que se justifica por la extensión de nuestro país y las características en que se realiza el transporte, lo que crea una situación de real desprotección que es aprovechada por quienes cometen estos hechos delictivos.

Con ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167, inciso 4º, queda también protegido el robo de esos efectos.

Por otro lado, es necesario reestructurar el capítulo de encubrimiento que es tan restrictivo en los casos comprendidos. Por ello adoptamos un tipo amplio y genérico de favorecimiento personal. El nuevo inciso 1º proyectado abarca los vigentes incisos 1º, 4º, 5º y 6º del artículo 277, elevándose la pena.

El proyecto contiene dos figuras de receptación. La del inciso 3º del artículo 277 y la del artículo 277 bis. La primera reemplaza a la del inciso 3º del artículo 277 vigente y se aumenta la pena. La fórmula es más precisa que la vigente. Mediante la segunda se incorpora la receptación de cosas de procedencia sospechosa, con me-

nos penalidad, toda vez que se trata de una infracción de menor entidad que la anterior.

En ambos casos la receptación agrava al doble la pena para quien hace profesión habitual de ello.

En el inciso 3º del artículo 277 se define con mayor amplitud el llamado favorecimiento real del inciso 2º vigente, también con mayor penalidad.

Por último se adecuan las normas de los artículos 278 y 279 referidas a la exención de pena, a los textos proyectados.

Estas modalidades reconocen sus antecedentes en el proyecto de Código Penal de 1960 del doctor Soler y también en el del doctor Peco, de 1941, e igualmente en los códigos italiano y alemán. Además, cabe consignar que han tenido vigencia en nuestro país y han merecido el consenso de la doctrina penal.

Esperamos que estas disposiciones permitirán una más efectiva protección, aunque no se nos escapa que éste es sólo un medio y un remedio parcial y que la solución que se persigue vendrá acompañada también de un más efectivo control de las fuerzas de seguridad en nuestras rutas.

Lorenzo J. Cortese.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Cortese sobre modificaciones al Código Penal, ley 11.179; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agrégase el siguiente inciso al artículo 163 del Código Penal —ley 11.179:

5º Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.

Art. 2º — Sustitúyese el inciso 4º del artículo 167 de la ley 11.179 (Código Penal) por el siguiente:

4º Si se practicare contra cualquier medio de transporte terrestre con el fin de apoderarse de las mercaderías, entre el momento de su carga y su entrega.

Art. 3º — Agrégase como inciso 5º del artículo 167 de la ley 11.179 (Código Penal) el actual inciso 4º:

5º Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.

Art. 4º — Agrégase el siguiente inciso al artículo 289 del Código Penal —ley 11.179—:

5º El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración o signo individualizador de un objeto registrado de acuerdo con la ley.

Art. 5º — Derógase los artículos 33 al 39 del decreto ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467 y el artículo sin numeración agregado por la ley de facto 22.977.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 13 de mayo de 1986.

*Eduardo A. Endeiza. — Oscar L. Fappiano.
— Néstor Perl. — Juan Rodrigo.*

INFORME

Honorable Cámara:

La calificación de la conducta en un tipo agravado debe incluirse únicamente con respecto al robo (artículo 167) para incriminar específicamente a la llamada "piratería del asfalto", es decir, a la sustracción de cargas de mercaderías, entre el momento de la carga y el de su descarga, que es una modalidad delictiva con cierto grado de organización, evitando de este modo la incriminación de delitos de pequeña significación económica que estarían abarcados por el tipo proyectado.

Por otra parte, la inclusión de un tipo calificado de hurto y robo de automotores con la consiguiente derogación del decreto ley 6.582/58, posibilitaría dar una más racional arquitectura a la ley penal y abarcar algunas hipótesis de hurtos de mercaderías mediante el apoderamiento del vehículo cargado de ellas. Corresponde señalar que este criterio se recepta en el proyecto de los señores diputados Perl, Fappiano y Rodrigo (expediente 54-D.-86).

En cuanto a la modificación del vigente sistema de tipificación del encubrimiento, es particularmente inconveniente la inclusión del proyectado artículo 277 bis, similar al que tuvo vigencia mediante la ley de facto 21.338, que generó serios cuestionamientos jurisprudenciales, motivando el reiterado pronunciamiento judicial incluso sobre la constitucionalidad de su formulación, especialmente en cuanto a la presunción que incluye pretendiendo abarcar hipótesis de dolo eventual, lo que no sucede.

Néstor Perl.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se introducen al Código Penal (ley 11.179) las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO 163

Incorpórase como inciso 5º el siguiente:

5º Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaren.

ARTÍCULO 277

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 277. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución alguno de los hechos siguientes:

- 1º Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
- 2º Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos de delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo.
- 3º Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble.

ARTÍCULO 277 BIS

Incorpórase el siguiente:

Artículo 277 bis. — El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía presumir provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble.

ARTÍCULO 278

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 278. — Están exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 277 a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que debiesen especial gratitud.

ARTÍCULO 279

Sustitúyese por el siguiente:

Artículo 279. — La exención de pena a que se refiere el artículo anterior no se aplicará al que haya ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Lorenzo J. Cortese.

OBSERVACIONES

1

Buenos Aires, 22 de mayo de 1986.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con el objeto de formular observación al dictamen de la Comisión de Legislación Penal, contenido en el Orden del Día N° 76.

En tal sentido vengo a efectuar la oposición que establece el reglamento de la Honorable Cámara, la que expondré oportunamente.

Saluda a usted muy atentamente.

Nicolás A. Garay.

2

Buenos Aires, 28 de mayo de 1986.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De mi consideración:

En virtud de lo establecido por el artículo 95 del reglamento, formulo observaciones al dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal que consta en el Orden del Día N° 76. Las observaciones son las siguientes:

Artículo 277, inciso 1º, Código Penal

Al final del inciso no se advierte cuál es la razón para suprimir, según como está establecido en el Código Penal vigente, el motivo o fundamento de la obligación de denunciar. Si bien se desprende del artículo que hay que estar obligado a denunciar, es evidente que esa obligación puede tener diferentes motivos y es menester precisarla. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la figura que Carrara denominaba "reticencia o connivencia" y rechazaba enfáticamente, pues señalaba que resulta absurdo presumir *jure et de jure* que quien omite en convertirse en delator de un hecho ajeno quiere el delito, toda vez que esa omisión puede estar motivada por múltiples razones —el temor, por ejemplo— que bajo ningún concepto han de ser catalogadas como delictuosas. (Francesco Carrara, *Teoría de la tentativa y de la complicidad*, Madrid, 1877, página 218 y siguientes; Guillermo Fierro, *Teoría de la participación criminal*, Buenos Aires, 1964, página 44.)

En consecuencia se propone agregar al final del párrafo lo siguiente: "por su profesión o empleo".

Artículo 277, inciso 2º, Código Penal

Es incorrecto, desde el punto de vista técnico, utilizar la expresión "o ayudare a alguien a procurar", pues tal hipótesis ya se encuentra contemplada por los artículos 45 y 46 del Código Penal. En las figuras de la parte es-

pecial el legislador debe describir siempre conductas de autor y no las de cómplice o instigador. Ello así por cuanto la participación es un "dispositivo ampliatoria del tipo" creado precisamente para evitar la defectuosa técnica legislativa que al lado de cada figura donde se define una conducta típica (de autor) requiriera poner otra describiendo la acción del cómplice primario, otra describiendo la del cómplice secundario, otra la del instigador, etcétera. Alviértase que el inciso 2º cuestionado sólo se refiere al autor y al que "ayuda" pero nada dice acerca del que instiga.

Por ello se propone suprimir en el texto la expresión "o ayudare a alguien a procurar".

Saluda a usted muy atentamente.

Alberto A. Natale.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante del dictamen de mayoría.

Sr. Posse. — Señor presidente: la Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Cortese sobre modificaciones al Código Penal (ley 11.179), y en nombre de la mayoría informo su dictamen.

Desde hace varios años, en el país el transporte automotor ha venido siendo agredido por organizaciones dedicadas a sustraer la valiosa carga transportada. Esta tendencia, lejos de atemperarse, ha continuado creciendo en los últimos tiempos en una medida realmente alarmante, lo que ha motivado la preocupación de la cámara que agrupa a los transportistas y de las entidades representativas del comercio y de los sectores manufactureros.

Con motivo de este tipo de delincuencia que perjudica seriamente tanto al comercio estadual como al interjurisdiccional, la Secretaría de Comercio Interior, por medio de su consejo asesor y luego de diversas reuniones, arribó a una serie de conclusiones para combatir esos robos y hurtos. Entre ellas recomienda medidas de carácter penal más severas, especialmente para los encubridores, sin cuya presencia y dada la magnitud de la mercadería sustraída estos delitos serían de muy difícil comisión.

La crónica periodística ha dado cuenta reiteradamente de hechos de esta naturaleza, y por haber tenido lugar principalmente en las rutas, en zonas apartadas y desprovistas de control inmediato, denominó a sus autores con la expresión gráfica de "piratas del asfalto", señalando que entre agosto de 1984 y 1985 se han producido 752 hechos de este tipo. Con posterioridad a esta última fecha el problema se ha agravado notablemente.

Este tipo de delincuencia organizada está provocando gravísimos problemas en la economía nacional en forma directa e indirecta. En primer lugar, debido al perjuicio que ocasiona en sí misma la realización de estos hechos, y por otra parte, en forma indirecta, por el encarecimiento del valor de las mercaderías producido a raíz de la elevación de las primas de seguros. Las compañías de seguros también se ven afectadas y comprometida su subsistencia por el incremento de las denuncias de siniestros de este tipo.

Obviamente, la reforma legislativa debe ir acompañada de un más efectivo control por parte de las fuerzas de seguridad tanto en las rutas como en las ciudades, dado que actualmente también los centros urbanos han sido elegidos por este tipo de delincuentes, que adoptan nuevas modalidades y utilizan medios sofisticados de comunicación, transporte y almacenamiento de la mercadería sustraída.

Lo expuesto da una idea exacta de la importancia y gravedad del problema respecto del cual el legislador debe buscar medios idóneos que permitan contar con tipos penales adecuados para combatir esta modalidad delictuosa.

Las modificaciones que se propician son las siguientes: se agrega un inciso en el artículo 163 del Código Penal para considerar como hurto agravado al que verse sobre mercaderías o cosas muebles transportadas por cualquier medio, calificante que se justifica por la extensión de nuestro país y las características en que se realiza el transporte, lo que crea una situación de real desprotección que es aprovechada por quienes cometen estos hechos delictivos.

La extensión de nuestro país, con zonas desprovistas de control inmediato y por cuyas rutas debe transitar el transporte automotor de mercaderías sin otra protección que la sola presencia del transportista, el que necesariamente debe realizar escalas no sólo para reabastecer el vehículo sino para su propia manutención y descanso, que obligan a dejar el vehículo con su carga sin vigilancia directa, está señalando la necesidad de proteger con mayor intensidad la carga transportada de los hurtos de que pudiera ser objeto, tanto en el itinerario como en las escalas.

Es una situación análoga a la contemplada en el inciso 1º del artículo 163, donde por la clase de objetos y por el lugar y las modalidades del trabajo del campo, se creó la necesidad de una mayor protección de los productos separados del suelo o máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo.

El inciso 5º del artículo 163 proyectado contiene una fórmula amplia, comprensiva de cualquier modalidad que pudiera revestir el hurto de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio, que se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizan.

Con esta incorporación del inciso 5º queda automáticamente agravado el robo de esos mismos objetos en iguales circunstancias en virtud de lo previsto en el artículo 167 inciso 4º del Código Penal. Si sólo se lo previera como agravante del robo, quedarían sin protección especial todas aquellas situaciones a que se ha aludido precedentemente, sin perjuicio de que en diversos casos particulares obligaría a considerarlos como hurtos simples por las dificultades normales de la prueba.

El tipo penal que se reestructura tiene la suficiente amplitud como para proteger también el traslado de cargas por otros medios de transporte, como el ferrocarril, que también es objeto de permanentes robos y hurtos; pero para la efectiva protección de la carga transportada es necesario complementarlo con una modernización del capítulo correspondiente al delito de encubrimiento. La regulación de este delito como figura autónoma y su ubicación sistemática entre las figuras contra la administración de justicia son el resultado de la moderna doctrina. Difícilmente otra disposición de nuestro Código Penal tiene como precedente un desarrollo más confuso e intrincado.

En este sentido, la historia de lo que hoy conocemos como encubrimiento consiste en su separación del concepto de la participación y del favorecimiento en el hecho punible y en su formación como delito peculiar e independiente.

A ese retardo en la elaboración teórica ha contribuido el hecho de que generalmente no se veía en el derecho romano una distinción clara entre complicidad, favorecimiento y receptación. A pesar de que algunas figuras tienen carácter autónomo desde muy antiguo, como ser la *receptatio latronum*, es lo cierto que durante el derecho intermedio y hasta bastante avanzado el siglo XIX no aparece un sistema en el cual este delito adquiera independencia.

La evolución de la teoría del delito que desemboca en su concepción como resultado u obra física y moralmente ejecutada por un sujeto, determinó que no podía seguirse colocando en el nivel de la participación el hecho de los sujetos que sólo intervenían una vez que el delito se había consumado. La figura de un cómplice a

posteriori resultaba tan inaceptable como la de la causa posterior al efecto.

Sin embargo, la ubicación del delito en el capítulo de aquellos que lesionan la administración de justicia no es unánime hoy día en todas las legislaciones, ya que en algunos códigos continúa manteniendo sus antiguos vínculos con los delitos contra la propiedad (por ejemplo, el artículo 259 del Código Penal alemán, el artículo 712 del Código Penal italiano y el 243 del Código Penal peruano).

En la legislación nacional el encubrimiento ha experimentado el mismo proceso. Tejedor, en su proyecto, siguió el sistema de colocar las cuestiones del encubrimiento entre los títulos de la parte general, distinguiendo tres grados: la ocultación y la receptación habitual; los mismos hechos sin habitualidad, y la omisión de denuncia para cada clase, y establecía una relación con las penas correspondientes a distintos grados de la complicidad disminuidos en un grado.

Este sistema, con algunas modificaciones debidas al proyecto Villegas Ugarriza y García pasó al Código Penal de 1887. Recién en el proyecto de 1891 se incorpora la moderna forma del encubrimiento legisándolo en forma autónoma y en el título de los delitos contra la administración de justicia. A partir de allí, con leves variantes, se mantiene la independencia y ubicación sistemática del delito en todos los proyectos posteriores.

Los proyectados incisos 1º y 2º del artículo 277 del Código Penal contemplan con la mayor amplitud posible y con una moderna concepción el denominado favorecimiento personal y el real. El inciso 1º abarca los vigentes incisos 1º, 4º, 5º y 6º del artículo 277, elevándose la pena. El inciso 2º reemplaza al vigente inciso 2º.

El inciso 3º se refiere a la receptación dolosa cuando se sabe proveniente de un delito y reemplaza al vigente inciso 3º del artículo 277, aumentándose la pena.

Mediante el artículo 278 se introduce la figura de la receptación sospechosa.

Por último, el proyectado artículo 279 incluye las causales de no aplicación de pena.

Con relación al artículo 277, se considera que la fórmula adoptada en los tres incisos, por su mayor amplitud que las vigentes, tanto en cuanto al favorecimiento personal como al real, resultará un adecuado complemento a la reforma que se propone mediante la inclusión del inciso 5º al artículo 163 del Código Penal.

El tráfico de las mercaderías obtenidas mediante la modalidad descrita en el proyectado inciso 5º del artículo 163 del Código Penal tiene un elemento fundamental en el reductor, quien

otorga la posibilidad de comercialización de las mismas. Sin su actuación la incorporación de ellas al tráfico lícito sería imposible.

Por otra parte, de acuerdo con las determinaciones efectuadas en ocasión del esclarecimiento de recientes hechos delictuosos cometidos mediante aquella modalidad, se ha podido establecer que el reductor es quien obtiene un mayor porcentaje del valor de las mercaderías. Lo expresado demuestra el disvalor de su conducta, circunstancia que obliga a elevar la pena de la figura, tal como surge del proyecto.

No se nos escapa el hecho de que la elevación de penas no es un remedio definitivo para terminar con el delito; pero ello, aunado a la ya requerida incrementación de la labor de las fuerzas de seguridad, constituye una herramienta idónea para lograr combatir en forma más eficiente este verdadero flagelo que azota hoy la economía nacional.

Si bien es cierto que la modalidad delictiva ejecutada por los denominados "piratas del asfalto" se lleva a cabo en muchas oportunidades por encargo, lo que llevaría a considerar al reductor como instigador o cómplice, también lo es que por dificultades normales de prueba dicho encargo muchas veces resulta imposible de acreditar.

Para completar el título del encubrimiento y proveer de esta forma a la efectiva protección de la carga transportada, se hace necesaria la incorporación del delito de receptación de cosas de procedencia sospechosa.

El verdadero flagelo que hoy constituye la forma de delincuencia de los denominados "piratas del asfalto", en gran medida no existiría en caso de suprimirse los canales de comercialización de la mercadería sustraída.

Si bien se propone en este proyecto —como se manifestara precedentemente— la elevación de las penas para el caso del receptador, se hace imprescindible para completar la gama de posibilidades de la mencionada comercialización, incluir esta figura que reprime la actividad de aquellas personas que adquieran, reciban u oculten cosas, efectos o dinero que de acuerdo con las circunstancias debían sospechar provenientes de un delito.

La figura tiende a cubrir un alto porcentaje de la incorporación al comercio lícito de mercaderías sustraídas, las que son recibidas por personas que no se detienen en su actividad, pese a la presunción cierta del origen espurio de la cosa.

Esta figura reconoce sus antecedentes en la legislación extranjera: artículos 280 y 281 del

Código Penal brasileño; artículo 243 del Código Penal peruano; artículo 712 del Código Penal italiano; artículo 161 del Código Penal polaco y artículo 259 del antiguo Código Penal alemán.

Entre los antecedentes nacionales se encuentran el proyecto de 1960 y las leyes de facto 17.567 y 21.338.

Si bien en la mayoría de la doctrina extranjera se ha considerado a esta figura como culpable, por razones que a continuación se expresarán se entiende que en el caso de este proyecto dicha caracterización no es correcta.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Federico Teobaldo M. Storani.

Sr. Posse. — La figura tiende a penalizar la conducta de receptar cosas de procedencia sospechosa cuando, por las circunstancias concretas del caso, el adquirente debía sospechar ese origen delictuoso y, con total desaprensión para el orden jurídico —asintiendo en la posibilidad de ese origen delictuoso—, prefiere realizar el negocio antes de cerciorarse de su verdadero origen.

Dichas circunstancias se fundarán, generalmente, como se señala en el Código Penal italiano, en las condiciones del oferente, en las cuantías de la cosa y en su precio. Pero dada la multiplicidad de situaciones que pueden revestir los diversos casos particulares, es preferible contemplar a todas con la denominación genérica "de acuerdo con las circunstancias", máxime cuando se contemplan otras hipótesis como las de recibir u ocultar con fin de lucro, situaciones en las cuales no puede hablarse de un precio, o por las cosas, si se trata de dinero, por ejemplo.

Es así, como lo sostiene la más autorizada doctrina y la mayoritaria jurisprudencia nacional, que este tipo penal contempla una receptación a título de dolo eventual, quedando descartada la posibilidad de que se lo considere un tipo culpable, porque no se trata de una situación de imprudencia o negligencia, sino de una actitud temeraria del autor con relación al orden jurídico, quien por las circunstancias debió abstenerse de obrar, y sin embargo lo hizo.

El tipo penal tiende fundamentalmente a subsumir en él la conducta de aquel que ha centralizado su actitud en la receptación de cosas de origen dudoso, poniendo condiciones tan favorables que estimulan la producción de hechos delictuosos, sabiendo, sin concierto previo, que tendrán un lugar seguro para negociar o reducir el producto del delito sin que se les exija la acreditación del origen de los bienes.

Técnicamente no son partícipes del delito cometido para obtener las mercaderías, por la falta de promesas anteriores al hecho, o porque no son quienes han determinado directamente a otro a cometerlo, y de allí la necesidad de prever un tipo especial que abarque estas conductas, que no se fundan en el positivo conocimiento del origen delictuoso de las cosas que se adquieren, reciben o guardan; de allí también la necesidad de agravar la pena cuando el autor hace de ello su actividad habitual.

La doctrina nacional, la extranjera y la jurisprudencia no han podido ponerse de acuerdo respecto del contenido subjetivo de la acción en esta figura.

En su libro de estudio, Edmund Mezger considera como culpable a esta figura en tanto estima que la antigua redacción del artículo 259 del Código Penal alemán no es feliz, pues la figura puede ser, en su opinión, solamente dolosa. Igualmente Maggiore, al comentar el artículo 712 del Código Penal italiano, cree que el autor obra culpablemente. (*Derecho Penal*, volumen I, página 291.)

En cambio, en la doctrina nacional no es unánime el criterio pues para Soler se trata de una figura dolosa, ya que al anotar el artículo 324 del proyecto de 1960 sostiene que no es éste el único caso en el cual se considera que está en dolo un sujeto que no hace algo que en concreto debe hacer —verificar antes de comprar— o que no se abstiene de hacer algo puramente facultativo —comprar—.

También Fontán Balestra sostiene que la figura es dolosa y para ello expone que para excluir la forma culpable es suficiente recordar la exigencia del fin de lucro, elemento subjetivo específico incompatible con un obrar imprudente o negligente. Habla este autor de un dolo condicionado, manifestando que la presunción del origen ilegítimo de las cosas o la duda o sospecha sobre su origen legítimo, equivalen en este caso a la ciencia; y ésta es, precisamente, la aptitud psicológica propia del dolo condicionado.

También Enrique Ramos Mejía y Alberto S. Millán consideran que las figuras de receptación son dolosas tanto en el caso de que se conozca a ciencia cierta la procedencia ilegítima de la cosa como cuando el autor deba presumir dicha procedencia de acuerdo con las circunstancias. El último de los autores mencionados pone énfasis sobre la ponderación que deberá efectuar el juez acerca de los dichos del acusado, valiéndose de las circunstancias objetivas obrantes en la causa (Fontán Balestra, *Tratado de Derecho Penal*, tomo 7, página 416, quien a

su vez transcribe los criterios de ambos tratadistas).

Por otra parte, al tratar el aspecto subjetivo de esta figura, Mezger considera —pese a lo expuesto originariamente sobre el punto— que la expresión “debe suponer en vistas de las circunstancias” significa que no existe limitación alguna a la simple culpa. Pero ella da una regla legal de prueba en el sentido de que se admitirá la existencia del dolo si las circunstancias “imponían indefectiblemente al autor su convencimiento acerca de la procedencia punible de las cosas”. Mas esta presunción es siempre refutable.

Vemos aquí cómo se aúnan los criterios en el sentido de considerar la prueba obrante en la causa, por parte del intérprete, para determinar la existencia del dolo.

Si de las circunstancias que rodearon el hecho surge irrefutablemente que el autor debió sospechar el origen espurio de la cosa y no obstante ello obró, su actuación debe ser considerada dolosa; de lo contrario no habrá delito.

Pese a lo expuesto, no podemos olvidar que autores de la talla de Núñez consideran como culposa a la figura.

En lo que se refiere a la existencia de algunos fallos que durante la vigencia de las leyes de facto 17.567 y 21.338 consideraron que la figura revestía el carácter de culposa, estimamos errónea dicha interpretación por lo que a continuación expondremos.

En primer lugar, debemos recordar que en la elaboración de este proyecto se ha tenido muy en cuenta la estructura del Código Penal argentino y en todo momento —ya sea en los debates previos como en las consultas efectuadas a los especialistas— se mantuvo como mira fundamental el hecho de que la reforma fuera homogénea con el articulado de dicho cuerpo punitivo. Esto viene a cuento para el caso de haberse estimado la posibilidad de incluir la figura culposa, echándose mano de las fórmulas que establece el Código Penal para tales situaciones, como ser hablar de imprudencia, negligencia, incumplimiento de los deberes a su cargo, etcétera. No es ésta la voluntad del legislador en este aspecto, voluntad a la cual deberá remitirse indefectiblemente el intérprete en caso de duda sobre la cuestión.

Por otra parte, es bueno recordar también que los fallos antes mencionados fueron dictados en razón de leyes de facto, las cuales han sido impuestas en forma autoritaria, sin haber existido, como en este caso, el debate previo.

Los mecanismos propios del sistema democrático de gobierno permiten la confrontación de

ideas y la libre expresión de todos aquellos que directa o indirectamente tengan interés en la cuestión, pudiendo de esa forma arribarse a la solución de problemas que, como el aquí tratado, constituyen una seria amenaza para la paz social. De esto se desprende que de la mentada confrontación de ideas ha surgido el acuerdo expreso acerca del carácter doloso de la figura a título de dolo eventual.

Si bien es cierto que ya con anterioridad a 1968 se dictaron fallos que consideraron que el delito de receptación simple —recuerdo que en ese entonces no existía la figura de la receptación sospechosa (artículo 277 inciso 3º del Código Penal)— era posible cometerlo a título de dolo eventual, dichos fallos lamentablemente fueron aislados, no resultando unánime el criterio mencionado en la jurisprudencia. Por lo tanto, se estima por demás conveniente introducir una figura que claramente contenga esa posibilidad en lugar de dejarla librada a la apreciación judicial.

En cuanto a la pena propuesta para la figura a incorporarse, consideramos que debe ser menor que la que del encubrimiento simple. Ello es así en razón de que —como ya lo mencionáramos— esta acción delictuosa puede cometerse a título de dolo eventual. De allí se desprende —tal como lo considera la doctrina nacional mayoritaria— que en estos casos la acción no está precedida de una voluntad directa, de un querer el fin antijurídico, sino que éste es solamente posible, aunque consentido. Esto debe ser tenido en cuenta por el juez para medir el dolo y debe reflejarse en el juicio de culpabilidad, y por ende en la mensuración de la pena (Jiménez de Asúa, tomo V, página 618). Este autor, al tratar el punto lo hace referido al caso de no existir en la ley una definición de dolo eventual o de no contemplar ella expresamente esa posibilidad para una figura determinada.

Pero aquí se está legislando expresamente una figura con ese tipo de contenido subjetivo, por lo que necesariamente la pena debe ser menor a la de aquella cuyo contenido sea el dolo directo.

Con lo expuesto dejo informado el dictamen de la mayoría. Espero haber interpretado correctamente a todos los señores diputados firmantes.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero, en su carácter de miembro informante del dictamen de minoría.

Sr. Rodrigo. — Señor presidente: esta reforma que se pretende introducir al Código Penal, además de la nueva figura —me estoy refiriendo al

encubrimiento— es uno de los tantos parches que se vienen sumando en este Código. Dentro de poco tendremos que crear un anexo que contenga todas las reformas o recurrir a una computadora para saber qué disposiciones aplicar en cada caso.

Hace dos años se designaron dos comisiones para que proyectaran la reforma total del Código Penal y del Código de Procedimientos en lo Criminal; hasta ahora no hemos tenido noticias. Mientras tanto, en la Comisión de Legislación Penal —que me honro en integrar— se acumulan los pedidos de reformas a la ley de fondo en materia penal. Si en poco tiempo no se produce ninguna novedad, nuestra bancada propiciará una nueva iniciativa para que de una vez por todas los miembros de esta Cámara sean los que se aboquen a modificar el Código Penal; ésta es una propuesta que ya formuló el sector justicialista por intermedio del diputado Perl.

Señor presidente: en general, nuestra bancada coincide con el despacho de la mayoría. Estamos a favor y vamos a apoyar la sanción de una figura penal que reprima este nuevo tipo de delincuencia llevada a cabo por quienes han sido denominados piratas del asfalto. En verdad, este tipo de delincuencia, que es de nuestro tiempo, ha producido graves perjuicios materiales.

De acuerdo con una estadística publicada en los periódicos, en cinco meses se produjeron más de 600 asaltos o robos, casi todos ellos en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Por ello es que nuestra bancada ha proyectado una figura específica, sancionando esta infracción directamente como robo y ha propuesto introducir un nuevo inciso 4º en el artículo 167 para sancionar con una pena de tres a diez años a todo aquel que practique robo contra cualquier medio de transporte terrestre con el fin de apoderarse de las mercaderías entre el momento de su carga y su entrega. Esa es la manera en que opera este nuevo tipo de delincuencia, es decir, en el proceso de entrega de la mercadería, entre la carga y la descarga, utilizando métodos violentos tanto para las cosas como para las personas.

Por ese motivo es que consideramos que lo que hay que sancionar es un robo y no lo que propone la mayoría al introducir la figura del hurto calificado e incluirla en un anexo.

En esta oportunidad también hemos creído indispensable introducir una modificación al artículo 163 por medio de un nuevo inciso a efectos de sancionar el hurto calificado de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de público acceso. Actualmente está penada la sus-

tracción de vehículos en la vía pública, pero de una manera desmedida e incongruente. Se encuentra penada en virtud de una sanción prevista por un decreto-acuerdo que ha perdido actualidad, a tal extremo que establece una pena mayor a la del homicidio para el caso de sustracción de un vehículo con el agravante de las lesiones previstas en el artículo 90 del Código Penal. Por eso hemos creído prudente que en esta oportunidad se sancione en forma razonable la sustracción de vehículos mediante la aplicación de la pena del hurto calificado, que es de uno a seis años.

En cuanto a la figura del encubrimiento, debo señalar que el dictamen de mayoría sólo efectúa una alusión tangencial e incorpora prácticamente lo establecido por el proyecto del doctor Soler de 1960. La reforma que se propone, salvo el cambio de unas pocas palabras, es totalmente idéntica a esa iniciativa. El proyecto de Soler ya estuvo en vigencia en virtud de la ley 17.567, sancionada por el gobierno de facto de Onganía en 1968. También se aplicó durante el gobierno de facto del general Videla con el número 21.338, siendo derogada por la ley 23.077. En definitiva, nuevamente estamos tratando de dar vigencia al proyecto de Soler de 1960, introduciendo algunas pequeñas modificaciones que, según mi concepto, no lo mejoran; por el contrario, lo empeoran.

Participamos de lo que se ha dicho en lo que respecta a los antecedentes del delito de encubrimiento. Sostenemos en este tema la tesis de Ricardo Núñez, que coincide con la del código italiano y con la del código del Brasil. Hacemos hincapié en que el artículo que la mayoría propone como número 278 recepta el concepto de sospecha. Tal como está redactado el artículo introduce modificaciones al del proyecto de Soler, que corresponde al número 324 y que expresa lo siguiente: "El que con fin de lucro adquiriere o recibiere cosas o bienes que de acuerdo con las circunstancias debía presumir provenientes de un delito, será reprimido."

Recalco la expresión "debía presumir", que en la iniciativa en tratamiento se ha reemplazado por "debía sospechar", pensándose que así se mejoraba el articulado.

Hay una diferencia fundamental entre presunción y sospecha, que en mi concepto lleva a calificar a esta figura de culposa y no de dolosa. Soler sostiene en la nota del artículo 324, citando varios códigos —entre ellos el de Brasil—, que ésta es una figura culposa. Más aún: dice que el código italiano también la sanciona como figura culposa y que sólo la habitualidad en esta

manera de obrar hace que se transforme en dolosa.

Me voy a permitir leer una breves líneas al respecto para que quede bien aclarado este pen-samiento. Dice Soler en su nota al artículo 324, que "el código italiano califica este hecho como contravención. La gravedad del caso —especialmente en la forma habitual, que en el fondo es la del Código Penal (artículo 277, inciso 5º)— consiste en que el espíritu de avidez lleva a una actitud de indiferencia hacia los eventuales derechos ajenos. Se trata, pues, de una forma dolosa."

Soler califica de dolosa la habitualidad. Cuando se trata de un hecho aislado, por más sospechoso que sea, siempre sería una figura culposa. Se habría obrado con negligencia o con culpa. Así lo explica acabadamente el penalista Ricardo Núñez —oportunamente citado por el señor diputado que me ha precedido en el uso de la palabra—, y nuestra bancada concuerda en que ésa es la tesis que corresponde aplicar.

Con estas diferencias pretendemos la aprobación de nuestro dictamen de minoría. También pretendemos hacer uso de esta oportunidad para introducir algunas otras modificaciones al Código Penal. En primer lugar, proponemos agregar al artículo 289 un inciso que sancione al que falsificare, alterar o suprimiere la numeración o signos individualizadores de un objeto registrado de acuerdo con la ley. Proponemos para esta infracción una pena de entre seis meses y tres años de prisión.

En la actualidad este tipo de delito se encuentra receptado por el decreto-acuerdo 6.582 de 1958, que sigue en vigencia y que ha sido ratificado por la ley 14.467.

Asimismo, es nuestra intención dejar sin efecto un artículo sin numeración agregado por la ley de facto 22.977.

Solicito a los señores legisladores que integran la mayoría de esta Cámara que reparen en las modificaciones que pretendemos introducir en este momento, ya que son de significación y es oportuna la ocasión para considerar eso.

Tampoco podemos pasar por alto y dejar sin sancionar una modificación del Código Penal que se refiere al hurto de vehículos dejados en la vía pública. Actualmente, la sustracción de automotores está legislada en los artículos 38 del decreto ley 6.582 de 1958; 162 del Código Penal, que sanciona al hurto de automotores con pena de uno a tres años de prisión; 163, que sanciona al hurto calificado de automotores con prisión de dos a seis años; 164, que impone una sanción

de tres a diez años de prisión, y 166, con prisión de nueve a veinte años. Esta es una enormidad que atenta contra la política criminalista, y se impone en esta oportunidad que ese delito sea sancionado en una forma racional, como hurto calificado, con una sanción de uno a seis años. Por eso propiciamos la introducción del inciso 5º del artículo 163 y del inciso 5º del artículo 289 del Código Penal, para sancionar a los falsificadores que alteran o suprimen la numeración de los vehículos u otras cosas que sean registrables.

Con los conceptos vertidos hemos brindado nuestro aporte a esta modificación del Código Penal.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: oportunamente formulé observaciones al dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal. Sin embargo, deseo manifestar que si el objetivo que se persigue con la pretendida introducción del inciso 5º en el artículo 163 es el de reprimir más severamente lo que se ha dado en llamar "piratería del asfalto", realmente entiendo que tal fin no se alcanza en esa forma. Tal como lo dijo el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, se podría haber agravado directamente el delito de robo previsto en el artículo 166.

Además, independientemente de la vinculación con el tema de la piratería del asfalto, no creo que sea razonable establecer una agravación de la sanción penal para el caso de hurto a los medios de transporte terrestre. Sostengo esto porque a pesar de la pretendida analogía que se quiere hacer con el hurto campestre, el hurto de ganado o abigeato, no existe realmente una estrecha vinculación.

En aquellos casos del artículo 163, inciso 1º, ha agravado la figura del hurto simple basándose en la situación de desamparo de los bienes utilizados en las explotaciones agropecuarias. Sin embargo, la distancia de la esfera de custodia que tienen esos bienes dejados en el campo y separados del suelo no se puede equiparar en modo alguno con lo que sucede con los camiones o los trenes. El hurto de una pequeña cosa, como un paquete de cigarrillos o una botella en un camión estacionado, daría lugar a que el autor del delito se hiciera pasible de una pena de hasta seis años de prisión.

Desde el punto de vista de la política criminal no creo que ello sea razonable, ya que el daño que el delito produce no tiene gravedad respecto de los bienes en cuestión, y la resolución criminosa que impulsa al autor hacia una

actitud de esa naturaleza, ocultándose para tomar una cosa ajena, está perfectamente concebida en la regulación del hurto simple.

El hecho de que se sustraiga la mercadería de un camión o un tren no es justificativo suficiente, porque la situación de desamparo que se da en el caso de los objetos que se hallan en el campo y son materia del llamado hurto campestre es absolutamente diferente.

Normalmente, el chofer del camión permanece en las cercanías del vehículo y cuando se detiene a pernoctar lo hace en las estaciones de servicio o en lugares que tienen cierto resguardo. Esta es una práctica permanente que quien recorra las rutas asiduamente puede observar. Por lo tanto, no se da esa situación que justifica el agravamiento de la pena.

Cuanto menor sea para el dueño la posibilidad de evitar la sustracción mayor debe ser la protección penal, y por eso se justifica el agravamiento en el caso del abigeato o hurto campestre.

Quiero señalar una circunstancia realmente peligrosa y respecto de la cual debe hallarse una fórmula para su agravamiento dentro del artículo 166 del Código Penal, que determina los agravantes del robo. Me refiero a los casos en que haya violencia en las personas o fuerza en las cosas, que son las características típicas de la piratería del asfalto. Quienes se presentan empuñando un arma y sustraen un camión con mercadería constituyen un flagelo que están sufriendo el transporte, las empresas comerciales y las compañías de seguros.

Debemos señalar que el mero hurto, que como lo expresa su propia denominación es furtivo y se hace sin la utilización de fuerza o intimidación, no produce gran perjuicio a la economía y tampoco constituye un delito de los considerados graves. Por el contrario, merece una pena exigua cuyo máximo no supera los dos años.

Por lo tanto, la piratería del asfalto no se combate con esta disposición, no obstante que por remisión al artículo 167 del Código Penal se podría agravar el robo; pero ésta sería una vía impropia e indirecta.

A este respecto, comparto lo expresado por los señores diputados del justicialismo en el sentido de agregar un inciso al artículo 167, en el que se prevea específicamente el robo de los medios de transporte.

Con relación al delito de encubrimiento, la primera observación que deseo hacer es que en su momento no ha sido tratado con la profundidad debida, ya que el artículo 278 que se propone en sustitución del vigente es el 278 bis que concebía la ley 21.338, aunque con una ínfima variante.

No se entiende por qué motivo este organismo legislativo sancionó una ley en la que se suprimía el delito de receptación sospechosa y ahora lo vuelve a incluir.

Quiero señalar que estoy de acuerdo con la inclusión del citado artículo, aun cuando estimo que la determinación de si se trata de dolo eventual o de culpa no tiene lógicamente relevancia en el ámbito penal y, por otra parte, es absolutamente imposible determinar el límite sutil entre el máximo de la culpa, que sería la culpa con representación, y el mínimo del dolo, que sería el dolo eventual.

En razón de que la actitud de volición interna del delincuente no se manifiesta en forma tangible en el mundo exterior, sería necesario introducirnos en la mente, en el espíritu y en el alma de quien delinque para saber si lo hace por una actitud de desprecio al orden jurídico, cuando concibe que ciertos objetos pueden ser de dudosa procedencia o de procedencia ilegal, e igualmente asume la responsabilidad. Esa actitud de desprecio constituiría el dolo eventual. Pero podría tratarse del mismo hecho, de la misma actitud externa, pero con la esperanza de que el origen de las mercaderías no sea delictivo, y se comete el delito por culpa con representación.

Creo que ésta es una discusión que debe superarse, porque de las exterioridades del delito no podrá extraerse, salvo por confesión, si se trata de un hecho cometido por dolo eventual o por culpa con representación.

Sugiero que el artículo 278 quede como está, pues considero que es una contribución para que pueda evitarse el beneficio obtenido como producto de hurtos, robos o toda la gama de delitos económicos, castigando a quienes posibilitan la venta y aseguran los resultados del delito.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: he formulado dos observaciones al despacho de la mayoría, cuyos fundamentos fueron explicitados en el momento oportuno. Ahora voy a resumirlos para el conocimiento de los señores legisladores.

En la reforma que se propicia al inciso 1º del artículo 277 no se incluye en la obligación de denunciar el hecho a quien debiera hacerlo por su profesión o empleo, creándose consecuentemente una presunción *juris et de jure* en cuanto a esa obligación de formular la denuncia.

Carrara cuestionaba este tipo de presunción sosteniendo la existencia de eventualidades que imponían la necesidad de excluir de la tipificación del acto, en determinados momentos, a quien no formulare la denuncia del hecho que llegara

a su conocimiento. Por esa razón propongo que se mantenga la redacción clásica y que al final de este inciso aparezca la expresión "por su profesión o empleo", es decir que puniría el hecho cuando se omitiere denunciarlo estando obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Además, en el inciso 2º del mismo artículo se incluye la expresión "o ayudare a alguien a procurar...", con lo que se está tipificando una figura que ya está prevista en la parte general del código, en los artículos 45 y 46, cuando se refiere a la participación criminal. No es de buena técnica incluir las figuras de participación en las normas especiales que tipifican cada uno de los delitos. De tal manera que propicio que se suprima en la reforma del inciso 2º del artículo 277 la expresión "o ayudare a alguien a procurar".

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: los tipos penales proyectados tienen por finalidad primordial proteger con mayor eficacia las mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio.

El proyecto aprobado por la Comisión de Legislación Penal en base a una iniciativa de la cual soy autor, tiende a cubrir los aspectos fundamentales de esta forma de delincuencia que se apodera ilegítimamente de la carga transportada, unas veces mediante simple apoderamiento y otras mediante fuerza en las cosas o con violencia en las personas, para luego negociar ilegítimamente el producto logrado por su ilícito proceder.

Esto último ocurre normalmente a través de personas que se aprovechan de estas circunstancias, en ocasiones con positivo conocimiento del origen ilícito de las mercaderías y otras con una total desaprensión del orden jurídico, asintiendo, aceptando o tomando a su cargo la posibilidad de que provengan de un hecho delictivo. Por estos motivos no sólo fue necesario modificar el artículo 163 creando un inciso 5º, sino todo el capítulo de encubrimiento, que en la ley vigente es excesivamente restringido, fundamentalmente en cuanto a la receptación de cosas de origen ilícito.

La modalidad del transporte de mercaderías en automotores es actualmente una realidad vital del comercio de este país, y para muchas localidades del interior que se encuentran alejadas de las vas férreas; al superarse el empleo de las carretas y otros medios y construirse rutas aptas para el transporte ágil y veloz, no hay otro medio de que arriben provisiones o salgan

los productos de su suelo que el empleo del automotor.

La modalidad de este transporte exige dejar en muchas ocasiones la carga transportada en la vía pública sin directa vigilancia, sea en escalas necesarias para el reabastecimiento, para el descanso o para la alimentación, o incluso para entregas parciales.

Todas estas circunstancias exigen una mayor protección por el Estado a través de la ley penal.

Según estadísticas que hemos valorado en la Comisión de Legislación Penal, en el período comprendido entre abril de 1985 y enero de 1986, solamente en la Capital Federal se han cometido 126 robos —en materia de carga transportada—, por un valor de 1.346.000 australes; y en las distintas localidades o partidos de la provincia de Buenos Aires, en el mismo período, sucedieron 395 hechos delictuosos por igual motivo, por un valor de la mercadería transportada cercano a los 5 millones de australes. En las diversas provincias del país, en el mismo período, y por igual motivo, sucedieron 105 hechos; todo lo cual suma —como ya se dijo en este recinto— 626 hechos en el término de ocho meses, lo que hace un promedio de 2 o 3 episodios diarios de apoderamiento ilegítimo de toda clase de mercadería transportada.

Los mismos fundamentos que pudieren determinar la agravación de los robos son los que determinan la necesidad de agravar también los hurtos, razón por la cual no encuentro sustento material en el dictamen de la minoría, que se aparta del criterio mayoritario en la necesidad de agravar los hurtos; por lo tanto, atento a la previsión del artículo 167 inciso 4º del Código Penal, quedan también agravados los robos por dichas circunstancias, sin necesidad de enmendar las disposiciones del robo.

Por todo ello reiteramos la necesidad de aprobar el proyectado inciso 5º del artículo 163 del Código Penal, que permitirá una retribución proporcionada a la gravedad del hecho cometido.

En el actual artículo 277 inciso 3º del Código Penal, la figura de la receptación es sumamente limitada, porque se restringe a los efectos sustraídos, con lo cual las mismas conductas respecto de efectos provenientes de otros hechos delictuosos no quedan abarcadas por el tipo penal. Ello determina la necesidad de modificar este inciso y también las demás figuras que por su casuismo resultan restrictivas, para reforzarlas por tipos más modernos, que se han adoptado en legislaciones extranjeras y que cuando tuvieron vigencia en el país demostraron sus ventajas.

En el proyectado inciso 3º del artículo 277 se incorpora la receptación de cosas o efectos que se sabe provenientes de un delito, comprendiendo con ello cualquier hecho delictuoso del cual provengan las cosas o efectos, cuando con fin de lucro se las recibiere u ocultare o se interviniera en su adquisición, recepción u ocultamiento. Es ésta una fórmula suficientemente amplia, que comprende las modalidades diversas por las cuales se puede afectar el bien jurídico protegido.

También se prevé el agravamiento de la pena, elevándola al doble cuando el autor hiciere de ello una actividad habitual.

Sin embargo, es necesario sancionar asimismo la receptación de mercaderías de origen sospechoso de provenir de un hecho delictivo, cuando se comprueba que efectivamente han tenido origen en un delito. A ello tiende el artículo 278 proyectado, que sanciona con menor pena que el caso anterior una conducta dolosa con expresa previsión del denominado dolo eventual, para aquellos casos en que el autor de la receptación, si bien no sabe positivamente que los bienes provienen de un hecho delictuoso, presume esa circunstancia y con total desaprensión para el orden jurídico acepta la posibilidad de este origen y no obstante actúa.

No debe pensarse que el proyectado artículo 278, cuya aprobación postulamos, prevé una presunción de dolo ni que se trata de un tipo culposo, como aquí se ha sostenido. Lo que se hace es suministrar elementos de juicio para que el juez pueda apreciar la existencia del dolo condicionado.

La expresión "de acuerdo con las circunstancias debía sospechar", no hace otra cosa que incorporar a la ley las diversas modalidades con que la jurisprudencia había venido señalando cuáles eran los indicios indicadores de la existencia del dolo. Para ello serán especialmente útiles las circunstancias que condicionan la operación, tales como el precio vil, la calidad de las personas, la clandestinidad, la hora, la ausencia absoluta de justificación del origen, la posibilidad real de que por sus condiciones personales no podría estar en posesión lícita y, sumándose a ello, el tipo y la cantidad de mercadería y la urgencia en desprenderse de ella, etcétera.

El inciso 1º del artículo 277 prevé con una fórmula amplia la modalidad del favorecimiento personal, ayudando a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, y también la omisión de denunciar un hecho delictuoso cuando se está obligado a hacerlo. Pero se trata de obligaciones jurídicas:

sólo está obligado quien por la ley debe formular dicha denuncia.

Esto, señor presidente, significaría una respuesta suficiente a la impugnación del señor diputado Natale, sin perjuicio de la ampliación correspondiente en el tratamiento en particular del proyecto.

En el inciso 2º del artículo 277 se prevé el denominado favorecimiento real, procurando o ayudando a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo. No debe verse en la fórmula "procurar o ayudar a alguien a procurar" una modificación de las reglas de la participación. Pero ocurre que tanto perturba o pone en peligro el éxito de la administración de justicia quien procura directamente alterar, ocultar o hacer desaparecer los rastros o pruebas de un delito como quien ayuda a alguien a procurar esa misma alteración. Por las modalidades del hecho, tal ayuda se tornará necesariamente en intervención directa: si se ayuda a borrar los rastros de un delito se lo comete en la misma forma como coautor, de igual modo que quien ayuda a alguien a robar, roba. Se trata de intervenciones materiales en el hecho o en parte de la acción típica, circunstancia por supuesto muy distinta de las hipótesis contempladas por el artículo 45 del Código Penal, que tratan de la ayuda al autor o coautores sin intervención en el hecho material.

Las razones expuestas resultan convincentes y suficientes, aunque ciertamente con mayor verosimilitud ya las ha dado el señor miembro informante a fin de requerir la aprobación de esta Cámara para el dictamen de mayoría.

Estamos sinceramente convencidos de que abordamos un tema legislativo de significación y tremenda actualidad, que efectivamente ha sido reclamado de manera insistente por diferentes sectores del conjunto de la sociedad. Tanto es así que en la órbita de la Secretaría de Comercio Interior se determinó la convocatoria a los sectores afectados, interesados en que se integraran organismos de seguridad a los fines del tratamiento preventivo de esta modalidad de la actividad delictual. Estas mismas circunstancias hicieron que en la Comisión de Legislación Penal mantuviéramos audiencias con representantes de distintas cámaras afectadas por este obrar delictivo, lamentablemente tan difundido en la actualidad. Así pudimos contar, entre otras, con la opinión de la Unión Industrial Argentina y el INDER. Como consecuencia de la legislación de seguros hay una infinidad de casos de hurtos protegidos por las respectivas coberturas de seguros; de allí que el

INDER tenga que responsabilizarse por estos sucesos, comprometiendo sus finanzas la manifiesta reiteración de ellos. Esto nos lleva al convencimiento de que el proyecto en consideración constituye la mejor respuesta legislativa que en este momento corresponde dar a tales fenómenos. Con todo detenimiento hemos estudiado la norma que se propicia, analizando antecedentes de doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia existente, y valorando la conveniencia de su sanción ante la situación de hecho ya referida.

En el día de la fecha varias cámaras empresarias publican importantes solicitudes en diarios capitalinos en las que analizan este tema, sugieren medidas, aplauden la labor del Ministerio del Interior y requieren apoyo para este proyecto. No es esto lo que quiero destacar en esta ocasión ni la voluntad o el interés de quienes, pudiendo resultar damnificados por el obrar delictivo de estas bandas que accionan en las rutas del país, ejercen correctamente el derecho republicano de peticionar. Lo que me lleva a remarcar esta circunstancia es el concepto de que con sólo una modificación legal no habrá de restablecerse la tranquilidad social; por el contrario, deberán actuar los más diversos sectores de la sociedad.

En esa solicitada las cámaras representativas de un sector formulan sugerencias y proponen medidas dirigidas a sus propios representados, a fin de posibilitar que el tráfico comercial se clarifique de manera tal que la labor de los organismos de seguridad se facilite y resulte más eficiente y útil, por lo que con ese comportamiento sectorial se propende a favorecer la labor de quienes institucionalmente deben luchar contra el flagelo de la delincuencia de hoy. Por supuesto, sabemos también que en este reclamo se anotan quienes en otros tiempos desde otros medios sirvieron a la acción de gobiernos de facto que crearon pánico y tuvieron otras características de violencia: allí también hubo una proliferación de la delincuencia, pero ésta pasaba por la persecución, la muerte y el encarcelamiento sin sumario.

Ahora estamos legislando, pues tenemos la responsabilidad funcional de hacerlo, dado que somos los depositarios de la voluntad popular y esa misión nos la asigna el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución Nacional. Por eso es que debo dar una explicación al señor diputado Garay, y permítaseme una aclaración previa sobre la forma en que se deduce la observación al dictamen de mayoría.

Nosotros no eludimos ni evitamos el debate en este recinto, pero queremos lanzar una reflexión a la seriedad legislativa. Alguna vez el diputado Adolfo Stubrin presentó una impugnación al mecanismo utilizado hoy por el señor diputado Garay, y la Cámara resolvió que basta deducir la impugnación en término, sin necesidad de desarrollar los argumentos, lo que puede hacerse en el recinto. Yo no quiero hoy replantear este tema, aunque quizás alguna vez sea necesario hacerlo. Pero cuando se tratan temas como éste, que tienen contenido científico, donde los depositarios de la voluntad popular deben ilustrarse —porque no vienen de la cátedra universitaria sino de las calles, donde tuvieron que derrotar a la dictadura militar para alcanzar este tiempo de libertad—, es decir, cuando los temas tienen tal tecnicismo, es una razón de más para que las observaciones se desarrollen por escrito para que sea posible el debate en la propia comisión.

Pero más allá de esto quiero decir que cuando derogamos la ley 21.338 hicimos un largo desarrollo doctrinario acerca de las diversas posibilidades de análisis de la legislación de facto con contenido penal que tenía este Parlamento.

Sobre este tema podría repetir muchos conceptos, si ello fuera hoy materia de análisis. En tal sentido recomiendo la lectura del informe que hiciera en aquella oportunidad en esta Cámara.

No nos sumamos a ninguna de las tesis extremas: nos encolumnamos en una tesis ecléctica que atemperaba y posibilitaba decir que estábamos actuando como depositarios de la voluntad popular. Derogamos la ley 21.338 y reservamos la posibilidad del Congreso de mantener algunas normas que considerábamos que tenían consenso en la comunidad y el respaldo de este cuerpo representativo de la voluntad popular; y lo hicimos nosotros, los oficialistas, desdiciendo lo que establecía el proyecto del Poder Ejecutivo. Fuimos acompañados por el Senado pero no tuvimos la posibilidad temporal de hacer un análisis del total de la normativa penal que había sido modificada por aquella norma. Estábamos forzados por el tiempo, porque era imperioso decirle al pueblo argentino que la ley 21.338, que tenía un vicio de origen y era claramente represiva, quedaba derogada en todo lo que no pudiera ser inicialmente consentido por la voluntad popular. Quedaron algunas otras figuras que pudieron ser rescatadas; pero si nos tomábamos el tiempo necesario y suficiente para el análisis pormenorizado y profundo, íbamos a mantener una disposición de facto incriminando a un pueblo con

normas que habían sido dictadas con un vicio fundamental de origen y tipificaban conductas que no era intención en este Parlamento mantener, o contenían penalidades que no compar-tíamos.

Por eso es que alguna vez no sólo tendremos que modificar el capítulo del encubrimiento, como hoy, sino que deberemos reestructurar algunas otras figuras penales. Lo haremos, y si tenemos que recurrir a los antecedentes doctrinarios o si alguna vez deberemos repetir alguna norma que puede integrar la ley de facto 17.567 o la 21.338, lo vamos a hacer con el convencimiento de que es la ley de la democracia y no de la dictadura la que se pretenderá establecer, no obstante las voces que aquí se levantaron no encontrando explicación a esta forma de operar de este Parlamento.

Por cierto, vamos a responder concretamente todas las cuestiones cuando se lleve a cabo el análisis en particular, pero me pareció necesario e imprescindible efectuar estas consideraciones generales porque este Parlamento no puede aparecer rozado por el restablecimiento de una norma similar a la de la ley de facto 21.338.

En cuanto a los antecedentes, no hemos analizado las leyes 17.567 y 21.338 sino el anteproyecto del doctor Soler elaborado en 1960, durante un período de gobierno constitucional; y remontándonos más hacia el pasado hemos visto la legislación universal que ya se ha referenciado, y de un modo especial, el Código Penal italiano.

Vamos a aprobar este proyecto en el convencimiento de que estamos incriminando accionares incorrectos y que el Parlamento del pueblo es el que incrimina. (*Aplausos.*)

Sr. Garay. — Pido la palabra para una breve aclaración.

Sr. Presidente (Storani). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — No sé si entendí bien, pero se ha hecho referencia a la seriedad legislativa como si fuera necesario y más valioso hacer una observación por escrito y en ella mencionar, seguramente en detalle, los motivos que la hacen razonable.

En este sentido quiero señalar que el reglamento no exige que en la observación se detallen los motivos que impulsan a su autor a formularla ni que deban ser expresados de viva voz en el recinto.

En cuanto a la seriedad legislativa de la expresión hablada o escrita se tergiversan muchas cosas y a veces se juega con la tolerancia y prudencia de un legislador cuando debe expre-

sarse sin ayudamemoria y sin lectura, ya que es algo que prohíbe el reglamento salvo que, en casos excepcionales, medie la correspondiente autorización. Esta disposición tiene una finalidad específica: evitar que la mera lectura petrifique el contenido de la discusión y que lo que se exprese por medio de la lectura sea inmutable. De lo contrario, la posibilidad de modificar la actitud de un legislador se vería imposibilitada porque se daría lectura a un texto preestablecido y preconcebido.

Por lo tanto creo que el no detallar las causas de la observación —que es mi caso— es menos grave que la lectura de una exposición en favor de un artículo propuesto.

Por otra parte, con referencia a la alusión sobre el dudoso origen de la ley 21.338, el propio diputado preopinante...

Sr. Presidente (Storani). — Señor diputado: está excediendo los límites propios de una aclaración.

Sr. Garay. — Seré muy breve, señor presidente.

En cuanto al aspecto específico de la ley a que hacía alusión el señor diputado, no creo que pueda justificarse el hecho de no haber estudiado en profundidad el tema por falta de tiempo en función del afán de derogar la ley 21.338, que recepta pautas e instituciones del derecho penal concebidas no por el gobierno de la dictadura sino por la doctrina y la jurisprudencia argentina. No entiendo cómo se puede hablar de seriedad cuando se propone derogar primero y luego ver si podemos servirnos de alguna norma de la ley derogada.

Finalmente —esto es algo que no pensaba decir—, no es agravando las penas como se reprime el delito. La pena debe ser justa y razonable. Se ha comprobado en otros países en los que existe la pena de muerte que, luego de sancionarla, la estadística criminal vinculada con los delitos no disminuyó.

En nuestro país han recrudecido el robo, el hurto y la piratería del asfalto, pero ello se debe a un problema económico. La solución no consiste en reformar un artículo del Código Penal sino en modificar la actitud del Estado en materia económica.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkner. — Hemos suscrito el dictamen de mayoría en disidencia parcial y hemos escuchado detenidamente las exposiciones de los distintos señores legisladores que se han referido a su contenido. Lamentablemente, en todos los casos no se ha tratado de una discusión en general, ya que la mayor parte de los señores le-

gisladores que han hecho uso de la palabra se han dedicado a efectuar un análisis en particular de la iniciativa. Esta circunstancia me obliga, aunque sea mediante una ligera enunciación, a mencionar los motivos por los que hemos disentido parcialmente del dictamen de la mayoría de la comisión. Me refiero en forma metafórica al dictamen de la mayoría de la comisión, ya que sólo cuenta con 11 firmas de los 25 integrantes que tiene.

El propósito del proyecto del señor diputado Cortese es encomiable y surge de una necesidad social acuciante que vive el país. Las estadísticas que él nos ha proporcionado sobre el desapoderamiento doloso de bienes transportados constituyen realmente un llamado a la reflexión de los señores legisladores, quienes por su función específica están obligados a arrimar no las soluciones, que son el resultado de un complejo sociológico que no sólo atañe al aspecto legal, sino todo lo que corresponde a su misión político-jurídica. A esta tarea estamos abocados.

Formalmente, aunque en materia penal no adhiero a la escuela normativista, como norma general del derecho es menester guardar ciertos principios que se refieren a la esencia misma de la tipología legal. Esta observación nos obliga a presentar algunas disidencias, que profundizaremos en el tratamiento en particular.

Asimismo, escuchando las exposiciones de mis colegas he llegado al convencimiento de que habría que efectuar algunos agregados a este proyecto; en este sentido coincido con el señor diputado Rodrigo.

La afirmación del señor diputado Cortese respecto de que debemos introducir en la legislación penal las reformas que sean necesarias pone una vez más de manifiesto su magnífico espíritu de trabajo y su contracción a la función legislativa; pero también debo recordar las palabras del diputado Rodrigo en el sentido de que hace casi ya dos años se han designado comisiones encargadas de redactar un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimientos Penales para evitar estas leyes que colocan parches y agregados que a veces se superponen, tal como ocurre con esta misma iniciativa. Más interesante sería que el clima de la República permitiese a los señores legisladores, cuya tarea no es fácil ni sencilla, elaborar un nuevo código con principios distintos, tal vez no aferrados a un normativismo neokantiano, sino a una realidad sociológica más actual, que incluso le brinde a quien está encargado de aplicar la ley la posibilidad de ajustarse más a la realidad social del caso concreto que está tratando.

Voy a referirme en general al motivo de nuestra disidencia. En primer lugar, en el artículo 163 se instituye —para calificar la figura del hurto y sacar la sustracción furtiva del artículo 162, es decir, del hurto simple— la calificación de la ubicación del bien objeto material del delito. Es decir, que esté en tránsito o que esté siendo transportado.

Nuestra intención es reprimir a los que han sido calificados aquí con acierto como “piratas del asfalto”, pero advierto que falta fundamentalmente la inclusión del caso en que el conductor, por ejemplo, ha dejado la llave puesta en el vehículo. En ese caso puede ser desapoderado del mismo mediante hurto simple y este tipo de sustracción debía estar incluido.

Sobre el particular y muy genéricamente —sin perjuicio de profundizar más adelante en este tema— coincido con lo expresado por el diputado Rodrigo, en el sentido de que si calificáramos en razón de la ubicación y de la situación del bien objeto material del delito al hurto, es decir, al apoderamiento ilegítimo sin fuerza en las cosas ni violencia en las personas, también tendríamos que ir a la figura del artículo 167, al cual deberíamos incorporarle un inciso tipificando calificadamente y aumentando la gravedad de la pena cuando el desapoderamiento se hubiera cometido con fuerza en las cosas y violencia en las personas.

El otro motivo que nos lleva a disentir del criterio de la mayoría que ha firmado el dictamen en estudio es la convicción absoluta de que el proyectado artículo 278 no es ni más ni menos que la repetición del delito de encubrimiento que se encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo 277. Más aun, tiene un defecto de técnica jurídica que hace al carácter científico del derecho penal. En efecto, la forma en que condicionalmente se tipifica la acción se expresa en la frase “debía sospechar”.

No vamos a hablar de la diferencia entre dolo eventual y dolo específico común, sino de la diferencia entre el dolo y la culpa, al margen de que la persona debía sospechar y no sospechó por negligencia, descuido o imprevisión, sin que hubiera mala fe. Estamos penando como delito específicamente doloso un delito culposo, lo que es una enormidad jurídica.

Creemos que ese artículo 278, con el “debía sospechar” puede ser suprimido, porque simplemente existe o no existe la intención, media o no media del dolo. El robo, el hurto, no pueden ser jamás culposos sino que por definición ontológica son dolosos. Existe o no existe el dolo y no se admite la posibilidad de si la persona debía

sospechar, porque ello admitiría la figura culposa para ser castigada como dolosa.

Estas consideraciones son de carácter general y estamos dispuestos a ampliar nuestros fundamentos en ocasión del tratamiento en particular del proyecto, si es que se resuelve tratarlo así, porque quizá fuera más prudente que este dictamen volviera a comisión para que la semana próxima trajéramos el despacho reacondicionado de forma tal que se lo pudiera votar sin la larga discusión en particular que auguran las consideraciones formuladas por los distintos señores diputados.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Serralta. — Señor presidente: intervengo en este debate a raíz de una nota que he recibido de la Cámara Pampeana de Transporte de Carga, que se expide respecto de este proyecto de modificación del Código Penal. Precisamente se trata de transportistas que han sido duramente afectados por los piratas del asfalto, y en consecuencia entienden que deben ser tomados en consideración, aunque el valor de su aporte desde el punto de vista de la técnica jurídica pueda no ser del todo correcto. Ellos sostienen que les parece de suma importancia legal y práctica el establecimiento de la competencia federal y la represión del encubrimiento culposo, y asimismo opinan sobre la inexcusabilidad del delito de robo.

Anticipo mi voto afirmativo para el dictamen de minoría, en cuyo texto se puede advertir no sólo la precisión con que desde el punto de vista de la técnica jurídica se ha concebido la definición de las conductas penales típicas, sino también que se ajusta al modus operandi que demuestra la experiencia acumulada por las autoridades de prevención.

Evidentemente estamos ante la presencia de bandas perfectamente organizadas para el crimen, por lo que es impensable encontrar en este caso la génesis delictual en el hecho cierto de la pauperización de gruesos sectores sociales. Estos profesionales del delito, a los que el periodismo ha definido como "piratas del asfalto", han llegado en su carrera delictiva a cometer asaltos por cifras astronómicas. Según el Instituto Nacional de Reaseguros, en el mes de octubre de 1985 la entidad cubrió ochenta y nueve robos en calles y caminos, de los cuales cincuenta y ocho se produjeron en Buenos Aires, veintitrés en la Capital Federal, seis en Santa Fe, uno en Mendoza y otro en Tierra del Fuego. Las cifras globales aseguradas en ese mes ascendieron aproximadamente a un millón quinientos mil australes, monto que no refleja el total de lo

sustraído ya que no en todos los casos los seguros cubren las mercaderías transportadas. Tampoco se incluyen los robos de que fue objeto YPF, pues sus cargas están amparadas por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Respecto de los objetos robados, es necesario señalar que hay una gran diversidad: golosinas, electrodomésticos, bolsas de polietileno, y ahora también materias primas de uso limitado, lo que revela el alto grado de sofisticación delictiva.

Por otra parte, hay que atender al clima de inseguridad que se ha generado ante la impunidad con que se realizan estos actos. Se debe tener en cuenta que entre los meses de abril de 1985 y enero de 1986 se produjeron aproximadamente setecientos robos a camiones, denunciados e investigados, y según la Asociación Argentina de Seguros hay que agregar a este número más de cuatrocientos asaltos no precisados, ocurridos en distintos puntos del país.

Un experto en seguros ha dicho que "no se roba lo que no se vende", poniendo la cuestión sobre otro de los costados de este accionar delictivo: las redes de comercialización, cuyo fin es el de ubicar en relativamente corto tiempo las mercaderías robadas. Según estudios recientes el producido del delito se distribuiría de la siguiente manera: 15 por ciento para los ladrones materiales, 25 por ciento para quienes ponen los depósitos a disposición y 60 por ciento para la red que comercializa.

Este cuadro ha obligado a las empresas propietarias de mercaderías y a las transportadoras a recurrir a diversos métodos de prevención, la mayoría de ellos ineficaces, entre los que podemos citar: colocar escoltas propias, procedimiento muy caro, sobre todo para largas distancias, ya que termina elevando notablemente el valor del flete y en consecuencia los precios; hacer diagramas de viaje a último momento para evitar la infiltración de las novedades de carga y destino; formar convoyes de camiones para trayectos largos, práctica limitada por la dificultad en coordinar horarios; colocar aparatos de transmisión banda ciudadana, etcétera.

En síntesis, este grave problema nacional a cuyo principio de solución se orientan estas reformas al Código Penal plantea algunas inquietudes respecto de los logros a obtener no sólo en cuanto a la represión sino esencialmente con respecto a la prevención. En cuanto a esta última, me queda la duda acerca de si las reformas propuestas son suficientes.

Cabría preguntarse si otros instrumentos podrían solucionar el problema y en virtud de ello

adheriría a la proposición del señor diputado Stolkiner en el sentido de que el proyecto vuelva a comisión.

Entre las iniciativas que podrían proponerse figuran la unificación de las normas de procedimiento, a fin de evitar que la multiplicidad de jurisdicciones afecte la pretensión punitiva; castigar en forma agravada a quien organice y financie este tipo de operaciones delictivas; prever la inhabilitación por el doble de tiempo de la condena a los comercios que expendan mercaderías robadas; prever la conducta del que recibe materia prima robada y la procesa químicamente para obtener otros productos, en algunos casos drogas o especialidades medicinales, y considerar de carácter federal el delito que estamos examinando, tal como sucede en el caso de los estupefacientes.

Los Estados Unidos, en donde el robo de mercaderías transportadas es delito federal, muestran una interesante experiencia desde el 29 de octubre de 1919, cuando se sancionó la llamada ley Dyer. Ese país que ha servido de modelo a nuestra organización institucional ha ratificado la constitucionalidad de esa norma en 1934 mediante un fallo de su Corte Suprema.

Finalmente quiero marcar el acierto del dictamen de minoría al prever en forma expresa el hurto de automotores dejados en la vía pública o en lugares análogos. En nota publicada en el diario "Clarín", un experto en temas policiales habló de la importancia de preservar y controlar el parque automotor, afirmando que en este tipo de delitos el automóvil es material bélico y sin ellos los delincuentes sufrirían limitaciones reales en su accionar.

Además y si bien se prevé el delito de falsificación al adulterar números de registros, tal vez sería útil sugerir a las empresas industriales que realicen grabados identificatorios más eficientes y difíciles de alterar.

Creo haber expresado la opinión de muchos sectores afectados por estos piratas del asfalto y solicito a la Honorable Cámara que la comisión respectiva tome en cuenta las sugerencias que he formulado.

Sr. Presidente (Storani). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Nieva. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Storani). — Se está llamando para votar y no puedo concederle la palabra.

Sr. Nieva. — Quiero hacer una aclaración porque he firmado el dictamen en disidencia y lo

dicho por el señor diputado Stolkiner va más allá...

Sr. Presidente (Storani). — El señor diputado debió haber pedido la palabra en el momento oportuno.

—Se continúa llamando para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Storani). — Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal, referido al proyecto de ley del señor diputado Cortese sobre modificaciones al Código Penal.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Storani). — Queda aprobado en general el proyecto contenido en el dictamen de mayoría.

En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Posse. — Señor presidente: como estamos ante un proyecto que contiene un solo artículo, he creído que es ésta la oportunidad para responder de alguna manera a las observaciones hechas por el señor diputado Natale, que concretamente se refieren en primer término al inciso 1º del artículo 277. Según el suplemento 2 al Orden del Día N° 76, el señor diputado Natale dice: "Al final del inciso no se advierte cuál es la razón para suprimir, según como está establecido en el Código Penal vigente, el motivo o fundamento de la obligación de denunciar. Si bien se desprende del artículo que hay que estar obligado a denunciar, es evidente que esa obligación puede tener diferentes motivos y es menester precisarla".

La obligación de denunciar no es una disposición genérica de la ley penal, sino que debe surgir en forma expresa de las leyes procesales y/o administrativas. Este es el criterio que sostiene la totalidad de la doctrina nacional sobre el punto.

En este sentido, Soler entiende que esa obligación no es impuesta en general a los particulares, y para que exista encubrimiento se requiere una disposición expresa (*Derecho Penal Argentino*, tomo V, página 262). Núñez opina que la obligación no es impuesta de una manera general por la ley sino que debe estar establecida de manera especial para ciertas personas o ciertos casos (*Análisis de la ley 21.338*, página 136).

La totalidad de los códigos procesales argentinos establecen esa obligación para los funcionarios o empleados públicos que hayan conocido

el delito en el ejercicio de su cargo. Así también los códigos argentinos imponen la misma obligación a los profesionales en el arte de curar que tomen conocimiento del hecho en el ejercicio de su profesión. Por su parte, en el ámbito administrativo existen en algunos casos normas que imponen la obligación de denunciar, sobre todo en el ámbito hospitalario.

Téngase en cuenta que las opiniones de los tradistas citados fueron vertidas al comentar el artículo 277 del Código Penal con la reforma introducida por la ley de facto 21.338, que contenía una fórmula similar a la que se propone. Lo expuesto demuestra que es inexacta la interpretación que se pretende dar al artículo del proyecto en el sentido de que por su redacción puede pensarse a quien omita denunciar por temor. Sólo comete el delito quien omite denunciar estando obligado a hacerlo. ¿Y de dónde surge esa obligación? De la misma ley, sea procesal o administrativa.

Por todo ello se considera acertada la fórmula del proyecto en el sentido de imponer como requisito previo la obligación de denunciar, dejando librado a la apreciación del intérprete legal el fundamento legal de dicha obligación, teniendo en cuenta la ley procesal y administrativa vigente.

Otra observación del señor diputado Natale está referida al proyectado inciso 2º del artículo 277. Dice: "Es incorrecto, desde el punto de vista técnico, utilizar la expresión 'o ayudare a alguien a procurar', pues tal hipótesis ya se encuentra contemplada por los artículos 45 y 46 del Código Penal."

La fórmula "ayudare a procurar" viene de antaño y jamás fue interpretada como una forma de participación en encubrimiento. En este sentido Lage Anaya sostiene que hay dos formas de comisión, ya que el autor puede obrar por sí solo, o sea independientemente, o bien prestar a alguien un auxilio o cooperación para procurar la desaparición. En este caso el sujeto es autor de encubrimiento y no partícipe del encubrimiento de otro. Ello es así porque ese alguien puede ser el mismo autor del delito anterior a quien el encubridor presta su ayuda (Lage Anaya, *Comentarios al Código Penal*, tomo III, página 220). Por ello se considera conveniente mantener la fórmula "ayudare a alguien a procurar", pues si el encubridor no procura directamente, es decir presta asistencia al propio autor o cómplice del hecho principal en la tarea de la desaparición de los rastros, de no existir esa fórmula sería impune.

Por las especiales características de la figura del cooperador, éste no es partícipe en el sentido

del artículo 46 del Código Penal, sino un verdadero autor del delito de encubrimiento.

Finalmente, quiero referirme a la disidencia planteada por el señor diputado Stolkiner, la que lamentablemente no conocimos en el seno de la comisión. En este sentido, deseo poner el acento en una parte de su observación en cuanto a la receptación de cosas sospechosas. Quise poner énfasis en establecer la caracterización de esta figura que se incluye, porque es el punto que necesita una amplia y explícita información a los efectos de facilitar la tarea, en caso de duda, a quien tenga que aplicar esta norma, es decir, al juez que deba resolver en definitiva.

No quiero ser reiterativo, pero creo que de mi primera exposición surgirá acabadamente cuál ha sido el criterio de esta norma, por lo que tampoco quiero entrar en una discusión doctrinaria sobre la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente. Sólo quiero reiterar el párrafo en que expresé: "Si de las circunstancias que rodearon al hecho surge irrefutablemente que el autor debió sospechar el origen espurio de la cosa y no obstante ello obró..." —aquí está la diferencia— "...su actuación debe ser considerada dolosa; de lo contrario no habrá delito."

Con lo expuesto creo haber contestado las observaciones formuladas.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: estamos considerando el artículo 1º, que comprende prácticamente todo el texto de la ley, porque el artículo 2º es de forma. De manera que voy a insistir en mi criterio. Entiendo que el artículo que figura como sustitutivo del artículo 278 debe suprimirse; el 279 debe pasar a ser el 278, y la segunda parte del 279 debe guardar la numeración que tiene ahora en el Código.

Si comenzamos a realizar un estudio analógico del inciso 3º del artículo 277 y del artículo 278, hallamos que la figura genérica del artículo 277 dice: "Será reprimido... el que...", es decir, viene a ser el sujeto; está identificado con distintas palabras pero es lo mismo; y el inciso 3º comienza diciendo: "Adquiriere", es decir, señala el verbo de la acción punible, que es el mismo verbo del artículo 278 proyectado como acción punible.

Pero luego continúa diciendo el inciso 3º del artículo 277 "...recibiére u ocultare dinero...", textualmente reproducido en el artículo 278; "...cosas o efectos...", agrega el inciso 3º del artículo 277, tal como el 278; y dice el inciso 3º del artículo 277 "...que sabía provenientes de un delito, ..." —que es el encubrimiento— "...o interviniera en su adquisición, recepción

u ocultamiento, con fin de lucro". Y el artículo 278 dice: "...que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar...", es decir, utiliza el condicional, y agrega: "...provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Vale decir que en el encabezamiento del artículo 277 se castigan las acciones punibles con una escala que va de los seis meses a los tres años, mientras que en el artículo 278 se castiga la acción punible con una escala que va de los tres meses a los dos años, o sea, se disminuye la pena.

¿Cuál es la razón? Entremos a analizar el tema. Adviértase que el inciso 3º del artículo 277 dice "sabía", es decir, afirmación positiva del conocimiento, mientras que en el artículo 278 se establece que "debía sospechar", y dentro del derecho penal esta expresión no es jurídica. Penetrar con la prueba, que debe ser concreta en cada caso, en lo subjetivo del autor del hecho, es una circunstancia muy difícil. Probar el conocimiento cuando ha sido negado y cuando no existen pruebas independientes sólo es posible por la confesión de parte.

Frente a la expresión "debía sospechar" cabe decir que es necesario para que "deba sospechar" que el sujeto incurra en negligencia, en imprevisión o en cualquiera de las conductas tipificadoras de la culpa; y estos delitos no pueden ser culposos.

Técnicamente y como hombre que me gusta el derecho penal me resisto a que se castigue como conducta dolosa una conducta culposa.

La tesis que sustento se afirma aún más si tomamos en cuenta la última parte de ambas disposiciones citadas, cuando dice: "Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble".

Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, evidentemente sabía, no debía sospechar, lo cual es contemplado correctamente en el inciso 3º del artículo 277. Cuando ha cometido reiteradamente la acción dolosa, antijurídica, no puede ya alegar ignorancia o negligencia, pues ha habido habitualidad. En definitiva, en este punto hay un atecnicismo.

Mi propuesta concreta es que se suprima el artículo 278, que el primer párrafo del artículo 279 pase a ocupar esa numeración y que la segunda parte del artículo 279 se mantenga con dicha numeración, que es la que actualmente tiene en el Código Penal.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: a fin de realizar una única respuesta y a efectos de uniformar el debate, preferiría que previamente hagan uso de la palabra quienes plantean observaciones al dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Nieva. — Quiero dejar aclarado que la disidencia que suscribiera juntamente con el diputado Stolkner no comprende la totalidad de lo que éste manifestara ante la Honorable Cámara. Comparto todo el dictamen de mayoría, con excepción de una expresión contenida en el artículo 278 que se proyecta.

En la comisión debatimos exhaustivamente el proyecto y en momento alguno la disidencia se formuló en el sentido de dividir artículos o suprimirlos.

Mi disidencia versa sobre la expresión "debía sospechar", pues la considero demasiado amplia y subjetiva. Así, los jueces que deban entrar a analizar las situaciones de hecho en que corresponda aplicar este artículo, van a tener un ordenamiento procesal poco claro a los fines del dictado del auto de calificación provisional con base en los elementos de prueba que se hayan ido acumulando.

La amplitud de la expresión contenida en el dictamen puede hacer que en la figura delictiva queden involucradas muchas personas que llegaren a adquirir mercaderías de buena fe. Opino que el término correcto es "sospechó" y habré de fundamentarlo.

Veamos un ejemplo. Un ama de casa adquiere de buena fe mercadería que a precio moderado le es ofrecida por vendedores ambulantes; luego de investigaciones se llega a determinar que tal mercadería era producto de un ilícito. Además de la buena fe a que aludiera, por tratarse de una cosa mueble, la posesión vale título. Entonces, en este caso ¿cómo vamos a hacer para allegar al juez los elementos necesarios para la tipificación de la figura delictiva que reprime este artículo 278 según la redacción que actualmente se propone?

Si se acepta la sustitución de la expresión del dictamen por la que he sugerido, el juez queda más circunscripto para dictar su fallo en base a los elementos probatorios reunidos. De tal forma, estamos dándole una expresión más imperativa a la ley; la otra redacción, en cambio, coloca al juez ante la necesidad de analizar subjetivamente la conducta de una persona y acá yo ya no puedo llegar a comprender cuáles serán los elementos de juicio que el juzgador habrá de ponderar para el mejor encuadre del caso.

Por ello, propongo que el nuevo artículo 278 quede redactado de la siguiente manera: "El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias sospechó provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble." De este modo somos más imperativos en la ley y podremos establecer que en base a los elementos probatorios el juez dictará un fallo en el que determinará la conducta de la persona a la cual haya de procesar.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Rodrigo. — Señor presidente: estamos discutiendo en particular el artículo 1º del proyecto, que en verdad comprende dos partes, por lo que adelanto que solicitaré que se voten separadamente.

La primera parte se refiere a la incorporación de un inciso al artículo 163, y la segunda se relaciona con el encubrimiento.

En primer término haré unas breves consideraciones con respecto al encubrimiento. Reitero que en lo que concierne a este tema el proyecto de ley está tomado casi textualmente del proyecto del doctor Soler de 1960.

Coincido ampliamente con las manifestaciones y la doctrina que cita el doctor Stolkiner al señalar que respecto del inciso 3º del artículo 277 no se puede hablar de una figura con dolo eventual o dolo específico. Si analizamos este inciso conjuntamente con el artículo 278 advertiremos que mientras el inciso 3º del artículo 277 exige —como lo señaló el diputado Stolkiner— que el sujeto pasivo que a va a ser encubridor sepa que los efectos que recibe provienen de un delito, vale decir que debe tener conocimiento del origen de lo que adquiere, recibe u oculta, en el artículo 278 ya no aparece esta exigencia y sólo se hace referencia a la sospecha. Entiendo que se trata de dos hipótesis completamente distintas: el inciso 3º del artículo 277 recepta la figura del encubrimiento doloso, en tanto que el artículo 278 comprende la figura de la culpa o negligencia. Así lo señalan los antecedentes que el propio doctor Soler cita en la nota al artículo 324 de su proyecto, donde dice que el código italiano y el de Brasil receptan esto como una infracción, vale decir, como una conducta culpable, y sólo se considera que actúa con dolo quien hace de esto una manera habitual de vida. Es esta avidez, este desprecio por la ley lo que hace aparecer el dolo eventual.

También coincido en que el vocablo "sospechar", que ha sido introducido por la comisión, debe ser sustituido y en todo caso se debería retornar a la palabra "presumir", que es la que utiliza el doctor Soler. El término "presumir" tiene otro significado, y si bien es cierto que implica una sospecha, importa conjeturar o juzgar sobre la base de indicios o señales, tal como lo explica el diccionario de la Real Academia Española. En cambio, "sospechar" significa aprehender o imaginar una cosa por conjeturas fundadas en apariencias o visos de verdad. Hay una gran diferencia entre usar los vocablos "presumir" o "sospechar". Cuando se utiliza la palabra "sospechar", evidentemente no se puede hablar de una figura dolosa; a lo sumo, se puede hacer referencia a una figura culpable o negligente.

En ese sentido acompañamos al diputado Nieva en la propuesta de sustituir la palabra "sospechar". Insisto en que debe emplearse el vocablo utilizado por el doctor Soler en su proyecto; es decir, "presumir", en lugar de "sospechar".

La primera parte del artículo que estamos considerando se refiere a la incorporación, como inciso 5º del artículo 163, del caso de hurto de mercaderías en tránsito. Con motivo de la consideración en general hemos dicho cuáles son las razones que nos llevaron a incriminar esta figura como la de robo. La experiencia que se tiene sobre la forma de operar indica que los "piratas del asfalto" no hurtan sino que roban. Si incriminamos con una pena de tres a diez años el hurto, corremos el riesgo de sancionar pequeñas infracciones o sustracciones de mercaderías en tránsito con una pena no acorde con una política razonable en materia criminal. Por ello es que también hemos proyectado y propiciado que se sancione con una norma especial la sustracción de los vehículos que se dejen en lugares públicos o de fácil acceso, suprimiendo de una vez y para siempre una disposición de 1958, de un gobierno de facto, que todavía está vigente y que por esa infracción impone penas superiores a las que corresponden por homicidio.

Por otra parte, tengo entendido que hace poco tiempo un juez declaró la inconstitucionalidad de ese decreto ley y una cámara del crimen ratificó la sentencia con la indicación de que se hiciera presente a los legisladores que debía modificarse la pena en cuestión por no estar de acuerdo con una política criminal racional.

Por estas consideraciones insistimos en el proyecto que hemos presentado. Solicitamos que se incorpore al artículo 167 un inciso 4º en el que se sancione al que practicare robo contra cual-

quier medio de transporte terrestre con el fin de apoderarse de las mercaderías, entre el momento de su carga y su entrega.

Por otra parte, en cuanto al encubrimiento, en el artículo 278 proponemos que se sustituya la palabra "sospechar" por "presumir", que es la que empleó Soler en su proyecto.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Intentaré analizar brevemente diversas observaciones formuladas al proyecto que estamos tratando.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Cortese. — En cuanto al informe producido en apoyo del dictamen de minoría, parece razonable que se sustente la modificación del artículo 167, que guarda relación con las razones dadas para no incluir la calificación de hurto, más allá de que la mayoría no comparta ese criterio. Pero no parece lógico que en el propio dictamen de mayoría el señor diputado Stolkiner sugiera la calificación incorporada al artículo 167, pues al calificarse el hurto con el incorporado inciso 5º, automáticamente se califica el robo, en virtud de lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 167. Esto es lo que nos ha llevado por razones de técnica legislativa a producir la calificación del artículo 163, resultando innecesario transcribir la calificación en el robo.

En relación al criterio sostenido por el diputado Rodrigo, de no calificación del hurto, mantenemos nuestra posición contraria. Creemos que la razón para calificar el hurto de las mercaderías transportadas está dada por su situación de desprotección, dadas las características del transporte en este país, a lo que nos hemos referido durante la consideración en general.

En cuanto a la observación efectuada por el señor diputado Stolkiner respecto de la supresión del artículo 278 del proyecto, repetimos que estamos legislando una figura dolosa de una manera especial.

Sr. Presidente (Pugliese). — El proyecto de ley que está en consideración contiene un solo artículo por el que se sustituyen y modifican varios del Código Penal. En consecuencia, para un mejor ordenamiento de la discusión en particular la Presidencia solicita que la Cámara preste su asentimiento para que la consideración y votación se haga por partes.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la incorporación de un inciso 5º al artículo 163 del Código Penal.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Se ha propuesto la eliminación de este inciso. La mayoría de la comisión no acepta esta supresión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la incorporación del inciso 5º del artículo 163 del Código Penal tal como ha sido propuesto en el dictamen de mayoría de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la sustitución del artículo 277 del Código Penal.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Las observaciones sobre esta sustitución ya fueron rebatidas por el miembro informante de la comisión, pero me permitirá analizar algunas que ha formulado el señor diputado Natale. En lo que respecta al inciso 1º, se considera que la observación no debe acogerse toda vez que la iniciativa utiliza la fórmula propuesta por el artículo 322 del proyecto de Soler de 1960, respecto de la cual no se conocen críticas de la doctrina. Además, cabe recordar que la norma reconoce como antecedentes el proyecto de Código Penal de 1960 y los códigos brasileño, peruano, alemán, italiano y polaco.

La norma tiene estrecha relación con disposiciones procesales y administrativas que fijan en ciertos casos la obligación de denunciar y, como se desprende del artículo y reconoce el autor de la observación, "hay que estar obligado a denunciar".

Propiciamos el rechazo de la observación que mereciera el inciso 2º del mismo artículo 277. Quien ayude a alguien, más que un cómplice sería coautor; el criterio del proyecto es el adoptado en el proyecto Soler de 1960, en su artículo 325; el del proyecto Peco, artículo 364, y el del código italiano, artículo 379.

No se trata de comprender supuesto de complicidad primaria ni secundaria, sino de captar conductas de coautoría emergentes de la ayuda concreta a quien procura el facilitamiento real.

El diputado Stolkiner se refirió, en un juego de análisis, al inciso 3º del artículo 277 y al artículo 278, sosteniendo la necesidad de mantener la norma del 277 y suprimir la del 278. Nosotros sostenemos que son dos conductas claramente diferenciadas. Podemos compartir los argumentos dados por el diputado Stolkiner en cuanto al artículo 277, pero en la figura del 278 soste-

nemos que estamos en presencia de una conducta dolosa a título de dolo eventual y en este supuesto el dolo no emerge de las circunstancias de valoración que debe efectuar el imputado.

Producida la posibilidad sospechosa de ilicitud, es decir, operada la alternativa, el imputado avanza en la negociación a título de interés económico, buscando un provecho y despreciando la normalidad del tráfico mercantil. Ese es el argumento para mantener ambas normas.

Reservamos para un análisis posterior el tema del artículo 278.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la sustitución del artículo 277 del Código Penal, tal como ha sido propuesta en el dictamen aprobado en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la sustitución del artículo 278 del Código Penal.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Posse. — Señor presidente: las observaciones realizadas a este artículo han sido de especial interés en el intento de dar mayor claridad al sentido de la norma, no sólo para ilustración de mis distinguidos colegas sino, fundamentalmente, en beneficio de su intérprete. Ya en mi anterior intervención hice referencia a observaciones que habían hecho en sus exposiciones los señores diputados Stolkiner y Nieva. En mérito a esa interpretación que se debe realizar para la aplicación de la norma, me remito a mi exposición anterior para fundar el rechazo de lo solicitado. De modo que en nombre de quienes firman el despacho de mayoría no acepto esas modificaciones.

En razón de que estoy seguro de que en mi anterior exposición me he referido en detalle a esas cuestiones, estimo innecesario reiterar la fundamentación de nuestra postura en este momento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkiner. — Señor presidente: el inciso 3º del artículo 277 —que ya fue votado y contó con mi apoyo— y el artículo 278 proyectado sólo se diferencian en que el primero tiene un verbo afirmativo y tipifica un dolo indudable. En cambio, el artículo 278 dice “debía sospechar”, y como decía el señor diputado Nieva y lo reitero yo, se trata de una expresión ambigua que puede cubrir un dolo eventual, como se pretende. Sin embargo, también puede definir una culpa; y como éstos son delitos típicamente

dolosos, no admito como de técnica jurídica que se sancione una culpa a título de dolo.

Por otra parte, cuando en su última parte el artículo 278 habla de habitualidad incurre en una contradicción lógica, pues la habitualidad presupone necesariamente el conocimiento de una conducta que se repite, y eso ya está contemplado en el artículo 277 porque aquí si estamos ante un dolo específico.

Estas razones de carácter eminentemente técnico me impiden, contrariamente a mis deseos, apoyar el despacho de mayoría.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: aquí se ha sugerido utilizar la expresión “debía presumir” en lugar de “debía sospechar”. En el profundo análisis que hemos efectuado respecto de esta modificación al Código Penal nos hemos inclinado por esos términos, que no receptan textualmente lo que constituía el proyecto Soler, precisamente porque entendemos que de esa forma avanzamos en la clara determinación de que estamos en presencia de una tipificación dolosa, aun a título eventual.

En cuanto a la observación formulada por el señor diputado Nieva respecto de sustituir “debía sospechar” por “sospeché”, creemos firmemente que no se corren los riesgos en los que incurriríamos de aceptarse esa propuesta. Cuando del deber de valorar las circunstancias que rodean a la negociación —el precio vil, la calidad de las personas, la clandestinidad, la hora, la ausencia absoluta de justificación del origen, la posibilidad real de que por sus condiciones personales no podría estar en posesión lícita, la cantidad de mercadería, la urgencia en desprenderse de ella, etcétera— debía surgir la sospecha, allí aparece la conducta que necesariamente debe ser incorporada a título de dolo, ya que la valoración de las circunstancias que rodean esa negociación indica claramente la especulación económica que motivó el acto, así como que se ha desechado una conducta socialmente útil al no rechazar un negocio rodeado de circunstancias sospechosas. Por todo lo expuesto vamos a mantener nuestra propuesta y solicitamos su aprobación.

Tampoco es valedera la observación que ha hecho el diputado Stolkiner en cuanto a la habitualidad, ya que en cada caso que sea motivo de análisis tendrá que determinarse si en ese obrar aparece una conducta que sea repetitiva de otras idénticas y dé razón a la calificante. No hay por lo tanto argumento que apoye la afirmación del señor diputado Stolkiner.

Quiero señalar que estamos abrazando en nuestras intervenciones a dos pilares fundamentales del derecho penal argentino. Me refiero a los doctores Núñez y Soler; el primero de ellos todavía vivo, aunque también me parece ver con vida al doctor Soler, a quien en muchas citas no se lo ha interpretado correctamente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la sustitución del artículo 278 del Código Penal.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la sustitución del artículo 279 del Código Penal.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: respecto del artículo 279 proyectado conviene formular algunas consideraciones, por cuanto la norma ha recibido algunas críticas que son infundadas y además equivocadas. Tales críticas han surgido de ámbitos ajenos al de este Parlamento.

Esta disposición, que ya se encontraba en el Digesto, cuya vigencia se remonta al año 533, ingresó a nuestra legislación en el Código Penal de 1887. Tiene el carácter de excusa absolutoria fundada en el reconocimiento del valor afectivo de los vínculos naturales.

En las críticas al artículo 279 proyectado algunos sectores han sostenido que permitirá que cualquier intermediario, encubridor o ayudante del delito invoque amistad íntima o gratitud hacia otro implicado, lo cual sería motivo para solicitar la exención de penas.

Tal crítica generaliza y en principio olvida que el segundo párrafo del artículo declara que tal excusa absolutoria no se aplicará al que hubiese ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio, y no analiza de qué manera la exención de pena se aplicará a los casos que prevé.

No es cuestión sólo de invocar el grado de parentesco que se detalla o la amistad íntima con el autor del hecho o que éste es alguien a quien el encubridor debiera especial gratitud. Por ser una excepción deberá ser probada, pero aun así ella alcanzaría únicamente a los supuestos de favorecimiento personal o real previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 277 proyectado y nunca a las hipótesis que contempla su inciso 3º, dado que allí se señalan conductas de receptación que al igual que en los casos que indica el artículo 278 proyectado abarcan situaciones que por lo general facilitan y/o hacen posible la consumación reiterada de los robos o hurtos de mercaderías transportadas, toda vez que estos autores o partícipes cuentan —o saben que cuentan

en la casi totalidad de los casos— con el reductor interesado en la carga apropiada ilegítimamente.

He hecho estas aclaraciones a los fines de la correcta interpretación de la norma y para que la comisión no aparezca consintiendo esas críticas que no responden a antecedentes doctrinarios ni legislativos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la sustitución del artículo 279 del Código Penal.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda aprobado el artículo 1º del proyecto.

— El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley 1.

Se comunicará al Honorable Senado.

10

SEGUNDO CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRIA

Sr. Presidente (Pugliese). — De acuerdo con el plan de labor oportunamente aprobado, corresponde que la Honorable Cámara pase a pronunciarse sobre los dictámenes recaídos en proyectos de resolución o de declaración contenidos en órdenes del día sin disidencias ni observaciones y de término vencido.

(Orden del Día Nº 50)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Asistencia Social y Salud Pública ha considerado el proyecto de declaración del señor diputado Botta por el que se declara de interés nacional el Segundo Congreso Argentino de Psiquiatría a realizarse los días 15, 16 y 18 de octubre de 1986 en la provincia de Córdoba; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 17 de abril de 1986.

Luis A. Cáceres. — Juan C. Barbeito. —
Ricardo A. Berri. — Ramón R. Aguilar. —
José Aramburu. — Raúl Bercovich Rodríguez. — Julio C. Corzo. — Julio L. Dimasi. — Miguel J. Martínez Márquez. —
Rodolfo M. Parente. — Osvaldo F. Pellin. — Juan C. Stavale. — Domingo S. Usín.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice (Página 2795.)